



Instrumentos
Internacionales
de Derechos Humanos

Distr.
GENERAL

HRI/CORE/1/Add.5/Rev.2
23 de junio de 1997

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

DOCUMENTO DE BASE QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE
LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

[24 de febrero de 1997]

ÍNDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. TERRITORIO Y POBLACIÓN	1	3
II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL	2 - 117	4
A. El sistema de gobierno	2 - 42	4
B. La aplicación de las leyes	43 - 117	13
III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	118 - 182	32
A. Autoridades competentes en materias relativas a los derechos humanos	118	32
B. Recursos y sistemas de indemnización y rehabilitación	119 - 140	32
C. Protección constitucional de los derechos humanos	141	37
D. Incorporación de los instrumentos de derechos humanos en la legislación nacional	142	37

ÍNDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
III. (<u>continuación</u>)		
E. Aplicación por los tribunales de los instrumentos de derechos humanos	143	37
F. Órganos nacionales encargados de vigilar la aplicación de los derechos humanos . . .	144 - 182	37
IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	183 - 184	47

I. TERRITORIO Y POBLACIÓN

1. Datos estadísticos fundamentales sobre el Reino Unido, basados en las cifras más actualizadas de que se dispone:

Ingreso per cápita	10.462 libras (1995, cifra provisional)
Producto nacional bruto	A los precios del mercado, 664.750 millones de libras <u>1</u> /
	Al costo de los factores, 577.570 libras <u>1</u> / (1995)
Tasa de inflación	2,2% (mayo de 1995 a mayo de 1996)
Deuda externa	323.000 millones de libras (1995/1996)
Tasa de desempleo	Total: 7,1%) Hombres: 9,5%) octubre de 1996 Mujeres: 3,9%)
Esperanza de vida	Hombres: 74,0 años) Mujeres: 79,3 años) 1996
Tasa de mortalidad infantil	6,2 por 1.000 nacidos vivos (1994)
Tasa de mortalidad materna	7,9 por 100.000 nacimientos (1994)
Tasa de fecundidad	1,74 (1994)
Porcentaje de población de menos de 15 años	Hombres: 20,4%) Mujeres: 18,6%) mediados de 1994
Porcentaje de población de más de 65 años	Hombres: 12,1%) Mujeres: 17,4%) mediados de 1994
Porcentaje de la población que vive en zonas rurales y urbanas	En zonas rurales 10,4% En zonas urbanas 89,6% (datos del censo de 1991 de Gran Bretaña)
Porcentaje de jefes de familia que son mujeres	27% (Encuesta familiar general de 1994)

1/ Cálculo basado en la definición utilizada por la OCDE. (Para fines internos se utilizan cifras diferentes.)

II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL

A. El sistema de gobierno

2. El sistema de gobierno parlamentario del Reino Unido no se basa en una constitución escrita, sino que es el resultado de una evolución gradual a lo largo de varios siglos. La esencia del sistema actual, que tiene ya más de dos siglos, consiste en que los dirigentes políticos que ejercen el poder ejecutivo son miembros del Parlamento y responden ante una asamblea elegida, la Cámara de los Comunes, cuyos miembros representan a los distintos distritos electorales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La permanencia en funciones del Gobierno depende del apoyo de una mayoría de la Cámara de los Comunes, en la que ha de responder a la crítica fundamentada y pública de una oposición capaz de sucederle si el electorado así lo decide.

Los poderes del Parlamento

3. El Parlamento es la autoridad legislativa suprema del país. Sus tres componentes -la Reina y las dos Cámaras (la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, elegida por el pueblo esta última)- están exteriormente separados. Las Cámaras, cuya composición se basa en principios diferentes, sólo celebran reuniones conjuntas en ocasiones de carácter simbólico tales como la coronación o la ceremonia de apertura del Parlamento, en que la Reina convoca a los Comunes a la Cámara de los Lores. Como órgano legislativo del Estado, sin embargo, el Parlamento es un órgano corporativo que, con algunas excepciones (véase infra), no puede legislar sin el concurso de todas sus partes.

4. El Parlamento puede legislar para todo el Reino Unido, para una sola de sus partes o para varias de ellas. También puede legislar para las islas del Canal y para la isla de Man, que son dependencias de la Corona, sin formar parte de Gran Bretaña y que tienen órganos legislativos subordinados que legislan sobre asuntos insulares. Los órganos legislativos de las islas del Canal (los Parlamentos -States- de Jersey y de Guernsey) y de la isla de Man (la Tynwald Court) están integrados por la Reina, el Consejo Privado y las asambleas locales. Incumbe al Ministro del Interior (Home Secretary), en su calidad de miembro del Consejo Privado especialmente encargado de los asuntos insulares, examinar minuciosamente cada medida legislativa antes de su presentación al Consejo.

5. La Ley orgánica del Parlamento (Parliament Act), de 1911, fijó en cinco años la duración del período parlamentario (si bien el Parlamento puede ser disuelto y pueden celebrarse elecciones generales antes de que expire la totalidad del plazo). Al no estar sujeto al tipo de limitaciones legales impuestas a los órganos legislativos de los países que tienen constituciones escritas, el Parlamento goza prácticamente de libertad total en materia legislativa: en términos generales, puede, pues, promulgar, derogar o modificar cualquier ley, legalizar situaciones ilegales, invalidar y declarar punibles actos que en su momento fueron legales, y anular, de ese modo, decisiones de los tribunales ordinarios; puede también dejar sin efecto convenios vigentes o convertir un convenio en ley vinculante.

6. En la práctica, sin embargo, el Parlamento no ejerce su supremacía de esta manera, ya que sus miembros, que tienen presente el derecho no escrito (common law) que se ha ido elaborando a lo largo de los siglos, tienden a actuar de conformidad con los precedentes y la tradición. Además, ambas cámaras son sensibles a la opinión pública y si bien la validez de una ley del Parlamento que ha sido debidamente aprobada, y legalmente promulgada y publicada por la autoridad pertinente, no puede ser impugnada ante los tribunales, es improbable que un Parlamento apruebe una ley que él sepa que no va a contar con el apoyo de la opinión pública. El sistema británico de gobierno basado en los partidos contribuye a garantizar que la labor legislativa del Parlamento se lleve a cabo teniendo en cuenta su responsabilidad ante el electorado.

La Corona y el Parlamento

7. Constitucionalmente, la existencia jurídica del Parlamento depende del ejercicio de las prerrogativas reales (es decir, en términos generales, del conjunto de los poderes residuales que aún tiene la Corona). Sin embargo, los poderes de la Corona en relación con el Parlamento están sujetos a limitación y modificación por vía legislativa y siempre se ejercen por intermedio y con el consejo de ministros que son responsables ante el Parlamento.

8. En su calidad de "cabeza" temporal de la Iglesia de Inglaterra, la Reina designa, atendiendo a los consejos del Primer Ministro, a los arzobispos y obispos, algunos de los cuales forman parte de la Cámara de los Lores a título de "Lores eclesiásticos". Como "dispensadora de honores", la Reina confiere también a ciertas personas (por recomendación del Primer Ministro, el cual consulta a su vez, por lo general, a otras personas) la condición de "par"; significa esto que los "Lores laicos", que constituyen el resto de la Cámara Alta, también han sido creados por prerrogativa real, pudiéndose aumentar su número en todo momento.

9. El Parlamento es convocado por proclamación real, y es igualmente la Reina la que lo prorroga (o suspende hasta el siguiente período de sesiones) y la que lo disuelve. Al comienzo de cada período de sesiones, la Reina se traslada solemnemente a la Cámara de los Lores y declara personalmente abierto el Parlamento. (En circunstancias especiales, puede confiar esta función a comisionados reales que actúan en su nombre.) En la ceremonia de apertura, la Reina se dirige a los Lores y a los Comunes reunidos en asamblea, y en su discurso, que es redactado por sus ministros, expone las líneas generales de la política del Gobierno y propone el programa legislativo para el período de sesiones que se inicia.

10. Ninguna ley puede entrar en vigor sin la sanción de la Soberana, sanción que, según la práctica establecida, es generalmente comunicada al Parlamento por los Presidentes (speakers) de las dos cámaras. Por otra parte, la Soberana conserva, además del derecho a ser consultada, el derecho a promover la adopción de ciertas decisiones, o, por el contrario, de precaver de tal adopción, pero hace mucho que el derecho de veto en materia legislativa ha caído en desuso.

Los períodos de sesiones del Parlamento

11. El mandato del Parlamento se divide en períodos de sesiones. Cada período de sesiones suele durar un año y por lo general concluye con una prórroga, aunque también puede ser disuelto. Durante un período de sesiones, cualquiera de las cámaras puede suspender las sesiones por propia iniciativa y hasta la fecha que estime oportuna.

12. Al clausurarse un período de sesiones, la prórroga suele entrar en vigor mediante un anuncio hecho a ambas cámaras en nombre de la Reina, en la Cámara de los Lores. La prórroga se mantiene en vigor hasta una fecha establecida, fecha que a su vez puede retrasarse o anticiparse mediante una proclama ulterior. La prórroga supone la cesación inmediata de prácticamente todas las actividades parlamentarias. Significa esto que todos los proyectos de ley parlamentarios no completados durante el período de sesiones deben volver a presentarse en el período siguiente a menos que se desista de ellos.

13. Por lo general, el Parlamento se declara disuelto al término del período de cinco años que dura su mandato, pero también puede el Gobierno solicitar su disolución antes de la conclusión de éste. Con arreglo a la práctica establecida, la continuidad del Parlamento queda garantizada por la declaración simultánea de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de elecciones, con indicación de la fecha en que deberá reunirse el nuevo Parlamento elegido. En caso de que la Soberana fallezca entre la fecha de disolución del Parlamento y la fijada para la celebración de las elecciones generales, tanto éstas como la reunión del nuevo Parlamento se aplazarán por un período de 14 días.

14. La suspensión de las sesiones no afecta a la labor parlamentaria en curso. El Parlamento puede volver a reunirse antes de lo previsto (en el caso de una suspensión de más de 14 días), ya por proclamación real, ya, si el interés público lo requiere, con mayor urgencia, haciendo uso de los poderes que cada cámara otorga especialmente a su presidente.

Irlanda del Norte

15. En el período comprendido entre 1921 y 1972 Irlanda del Norte tuvo su propio Parlamento y su gobierno, que estaban subordinados al Parlamento de Westminster, pero en 1972, después de varios años de violencia sectaria y terrorismo, el gobierno de Irlanda del Norte dimitió, estableciéndose a partir de entonces el gobierno directo por el Parlamento del Reino Unido, al mismo tiempo que se confiaban los poderes ejecutivos a un Secretario de Estado para Irlanda del Norte, ministro del gabinete, que desde entonces ha desempeñado las funciones que antes ejercían el gobierno de Irlanda del Norte y sus departamentos. Para mantener un cuerpo coherente de legislación de Irlanda del Norte que pueda transferirse a una futura asamblea legislativa, el Gobierno por lo general enmienda o complementa la legislación vigente para Irlanda del Norte mediante el procedimiento de decretos del Consejo Privado (Orders in Council), menos sujetos a escrutinio que los proyectos de ley normales, por lo que existe una disposición especial para la celebración de

consultas sobre las propuestas legislativas, incluso debates en el Gran Comité de Irlanda del Norte. También puede recurrirse a proyectos de ley adoptados en Westminster cuando sea práctico y conveniente.

La Comunidad Europea

16. Desde la adhesión de Gran Bretaña a la Comunidad Europea en 1973, han entrado en vigor en el país las disposiciones del Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas, de 1972, relativas a la aplicación del Tratado de Roma. Esas disposiciones se refieren a diversos tipos de normas comunitarias, tales como los reglamentos, que son legalmente vinculantes y se aplican directamente a todos los países miembros, y las directivas, elaboradas también por la Comunidad (cuyo Consejo de Ministros está integrado por representantes de los Gobiernos de todos los Estados miembros). Las directivas son igualmente vinculantes en lo que respecta al resultado que debe lograrse en cada uno de los Estados miembros a los que están dirigidas, pero permiten a los parlamentos nacionales decidir la forma y el método de aplicación de sus disposiciones. Se han adoptado procedimientos parlamentarios especiales para mantener informados a los miembros de ambas cámaras del Parlamento británico acerca de las novedades que se registran en el ámbito de la Comunidad Europea, y, más recientemente, acerca de las novedades relativas a los otros dos "pilares" de la Unión Europea (política internacional y de seguridad, y políticas de interior y justicia), tras la adhesión del Reino Unido al Tratado de Maastricht en 1993.

17. El Reino Unido, al igual que otros países miembros de la Comunidad, envía diversos representantes al Parlamento europeo. El Parlamento controla las instituciones de la Comunidad, para lo cual examina la legislación, hace preguntas a la Comisión y al Consejo de Ministros y debate todas las cuestiones importantes de política de la Comunidad.

La composición del Parlamento

18. El sistema bicameral es parte integrante del Gobierno parlamentario británico. La Cámara de los Lores (la cámara alta) y la Cámara de los Comunes (la cámara baja) se reúnen por separado y se basan en principios totalmente distintos, pero ambas cámaras participan en el proceso legislativo.

19. Desde los orígenes del Parlamento, el equilibrio de poderes entre las dos cámaras ha registrado cambios fundamentales. Y ese proceso continuo de desarrollo y adaptación se ha acelerado mucho en los últimos 75 años. Con arreglo a la práctica actual, el poder parlamentario reside fundamentalmente en la Cámara de los Comunes, de elección popular, pero hasta el siglo XX el poder de veto de los Lores sobre las medidas propuestas por los Comunes era teóricamente ilimitado. Ahora, con arreglo a las Leyes orgánicas del Parlamento de 1911 y 1949, determinados proyectos de ley pueden convertirse en ley sin el consentimiento de los Lores. La Ley de 1911 restringió ya el derecho de los Lores a retrasar la aprobación de proyectos de ley relativos exclusivamente a gastos o impuestos y limitó su poder para

rechazar otro tipo de leyes. De hecho, con arreglo a la Ley de 1911, los Lores sólo podían retrasar por dos años la aprobación de los proyectos de ley. La Ley de 1949 redujo, a su vez, este plazo a un año.

20. Estas limitaciones de las facultades de la Cámara de los Lores se basan en la idea de que la principal función legislativa de esa Cámara debe reducirse en nuestros días a la revisión de los proyectos de ley, y de que su actividad no es opuesta sino complementaria de la de la Cámara de los Comunes.

La Cámara de los Lores

21. La Cámara de los Lores está integrada por:

- a) Los Lores eclesiásticos: los arzobispos de Canterbury y York, los obispos de Londres, Durham y Winchester, y los 21 obispos diocesanos de más antigüedad después de los citados, de la Iglesia de Inglaterra;
- b) Los Lores laicos, subdivididos en i) todos los pares y parejas de Inglaterra, Escocia, Gran Bretaña y el Reino Unido que no hayan renunciado a sus títulos con arreglo a la Ley sobre los pares (Peerage Act) de 1963; ii) todos los pares y parejas vitalicios nombrados por la Corona en virtud de la Ley sobre pares vitalicios (Life Peerages Act) de 1958; y iii) los Lores jueces del Tribunal de Apelación, nombrados con carácter vitalicio en virtud de las leyes sobre los tribunales de apelación (Appellate Jurisdiction Acts) de 1876 y 1887 para asistir a la Cámara en sus funciones judiciales. Algunos de estos jueces pueden ser ya miembros de la Cámara y todos siguen siéndolo después de su jubilación.

22. El título de par hereditario lleva consigo el derecho a pertenecer a la Cámara de los Lores (la ley prevé diversos motivos de inhabilitación), siempre que el o la titular haga valer su derecho y tenga 21 años cumplidos, pero cualquier persona que herede un título de par puede, en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de la sucesión, renunciar a él por el resto de su vida de conformidad con la Ley sobre los pares (Peerage Act). Al renunciar al derecho a ser miembro de la Cámara de los Lores, los renunciantes adquieren el derecho de sufragio activo y pasivo para la elección de miembros de la Cámara de los Comunes.

23. La Soberana, atendiendo a los consejos del Primer Ministro, otorga títulos de par temporal (tanto hereditarios como vitalicios). Esos títulos se conceden, por lo general, en reconocimiento de destacados servicios prestados en el campo de la política o en otras esferas de la vida, o porque el Gobierno del momento desea que el beneficiario forme parte de la Cámara Alta. La Cámara de los Lores ofrece también la posibilidad de hacer participar en el Parlamento a hombres y mujeres cuyo parecer puede ser útil para el Estado, pero que no desean hacer política en el marco de un partido. A diferencia de la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores no tiene un número fijo de miembros, y de ellos son relativamente pocos los que se

dedican de lleno a la política. Se suele aprovechar la oportunidad para nombrar como pares o paresas vitalicios a antiguos miembros del Gobierno capaces de desempeñar útilmente esa función en la Cámara de los Lores. En relación con Escocia, en los últimos años también se ha nombrado como ministros de la Corona a miembros de la Cámara de los Lores nombrados como pares vitalicios específicamente para este fin, como, por ejemplo, el Fiscal General para Escocia (Lord Advocate).

La Cámara de los Lores como última instancia judicial

24. Además de su labor parlamentaria, la Cámara de los Lores desempeña importantes funciones judiciales, ya que constituye la última instancia para las causas civiles en todo el Reino Unido y para las causas criminales en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. En principio, todos los Lores tienen derecho a asistir a la Cámara cuando ésta actúa como tribunal de apelación, pero en la práctica, y tradicionalmente, sus actuaciones judiciales están a cargo del Lord Canciller (Lord Chancellor), que acude de vez en cuando a la Cámara, los Lores magistrados (a los que se designa expresamente, como ya se ha dicho, para el desempeño de estas funciones de la Cámara y que reciben un sueldo) y -cuando es necesario- otros Lores que desempeñen o hayan desempeñado altos cargos judiciales. Por tradición, entre los Lores magistrados hay por lo menos dos que son jueces escoceses. Normalmente, aunque no siempre, estos jueces se encargan de conocer las causas escocesas.

La Cámara de los Comunes

25. La Cámara de los Comunes es una asamblea de representantes elegidos por sufragio universal de las personas que han alcanzado la mayoría de edad, y está integrada por hombres y mujeres (llamados miembros del Parlamento) que proceden de todos los sectores de la sociedad, con independencia de toda diferencia de orden económico o profesional. La Cámara de los Comunes tiene 651 escaños, de los que 524 corresponden a Inglaterra, 38 a Gales, 72 a Escocia y 17 a Irlanda del Norte. Gracias a las órdenes aprobadas en 1995 a raíz de los estudios realizados por la Comisión de Delimitación, el número de escaños para Inglaterra aumentará a 529, a 40 para Gales y a 18 para Irlanda del Norte con efecto a partir de las próximas elecciones generales, con lo que se llega a un total de 659 escaños.

26. Los miembros de la Cámara de los Comunes, que mantienen sus escaños durante todo el período parlamentario, son elegidos en las elecciones generales que se celebran en caso de disolución del Parlamento y de convocatoria para la constitución de otro por la Soberana, o en las elecciones parciales que tienen lugar cuando se produce una vacante en la Cámara por fallecimiento o dimisión de uno de sus miembros, o como consecuencia de la elevación de un miembro a la Cámara de los Lores.

Las elecciones legislativas

27. Para fines electorales, el Reino Unido está dividido en zonas geográficas o circunscripciones (constituencies), cada una de las cuales envía un representante a la Cámara de los Comunes. A fin de garantizar una

representación equitativa existen Comisiones de Delimitación para Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las cuales revisan periódicamente -a intervalos no inferiores a 8 ni superiores a 12 años- los límites de las circunscripciones establecidas para las elecciones de miembros del Parlamento y de representantes del Reino Unido en el Parlamento Europeo, y recomiendan la redistribución de escaños que estimen necesaria a la luz de los cambios demográficos y de otro tipo que se hayan registrado en el intervalo. Esas comisiones pueden también presentar informes provisionales sobre determinadas circunscripciones cuando, por ejemplo, sea necesario adaptar los límites de la circunscripción de que se trate a una nueva delimitación del término municipal.

28. Las disposiciones relativas a las elecciones legislativas figuran en las Leyes sobre la representación popular (Representation of the People Acts). Las elecciones de representantes para la Cámara de los Comunes se efectúan por sufragio secreto. En ellas pueden participar todos los ciudadanos británicos, ciudadanos de otros países del Commonwealth y ciudadanos de la República de Irlanda residentes en el Reino Unido que tengan 18 años cumplidos y no estén inhabilitados para ello por la ley. No tienen, en cambio, derecho a votar en elecciones legislativas las siguientes personas: los pares y paresas (estas últimas cuando lo sean por derecho propio y no por matrimonio), que son miembros de la Cámara de los Lores; los ciudadanos no británicos, del Commonwealth o irlandeses; los enfermos internados en aplicación de la legislación sobre la salud mental; los delincuentes que están cumpliendo condena en prisión y cualquier persona que en los cinco años anteriores haya sido condenada por corrupción u otras prácticas electorales ilegales. Para poder votar en determinada circunscripción, el elector debe estar registrado en el correspondiente padrón electoral actualizado. Los oficiales de registro electoral establecen cada año, en efecto, el padrón electoral de cada circunscripción.

29. Aunque el voto no es obligatorio, en una elección general la mayoría del electorado (más de 33,6 millones de personas -el 77,7%- en las elecciones electorales de abril de 1992) ejerce su derecho. En las elecciones parciales el porcentaje de participación puede ser muy inferior. Por lo general, los electores votan personalmente en los colegios electorales especialmente establecidos con ese fin.

30. Todo hombre o mujer que sea ciudadano británico, ciudadano de otro país del Commonwealth o ciudadano de la República de Irlanda, no esté inhabilitado para el voto y tenga 21 años cumplidos, puede presentarse como candidato en las elecciones legislativas. Entre las personas inhabilitadas figuran los quebrados no rehabilitados, las personas condenadas a más de un año de privación de libertad, los miembros de la Cámara de los Lores, el clero de las Iglesias de Inglaterra, Escocia e Irlanda y de la Iglesia católica romana, y las personas afectadas por la Ley sobre inhabilitaciones para la Cámara de los Comunes (House of Commons Disqualification Act) de 1975, personas entre las que se encuentran las que desempeñan cargos judiciales, los funcionarios públicos, los miembros de las fuerzas armadas regulares o de los servicios de policía, y los ciudadanos británicos que son miembros de los órganos legislativos de países o territorios no pertenecientes al

Commonwealth. También están inhabilitadas las personas que desempeñan una amplia variedad de cargos públicos, por ejemplo en empresas públicas o comisiones gubernamentales. Los candidatos pertenecen por lo general a uno de los principales partidos políticos nacionales, pero también los partidos más pequeños y otras agrupaciones pueden designar candidatos, y cualquier persona puede ser designada aun sin el apoyo de un partido. Toda candidatura debe estar firmada por dos electores, que la inician en calidad de proponente y coadyuvante, respectivamente, y por otros ocho electores inscritos en el padrón electoral de la circunscripción de que se trate.

31. El sistema de votación utilizado es el de la mayoría simple, en cuya virtud queda elegido el candidato que más votos haya obtenido en relación con cada uno de los siguientes, aunque no necesariamente más que todos ellos conjuntamente considerados.

32. Periódicamente, el Speaker presidía hasta hace cierto tiempo una conferencia de miembros del Parlamento, en la que se examinaban posibles cambios en las leyes electorales. Como en el caso de otros comités parlamentarios, la composición de la Conferencia refleja la importancia relativa de la representación de cada uno de los partidos en la Cámara. Las sesiones de la conferencia son privadas y sus recomendaciones se publican en forma de notas del Speaker al Primer Ministro. En la actualidad, un Comité Especial examina normalmente los posibles cambios en las leyes electorales.

El sistema de partidos

33. La existencia en el Reino Unido de partidos políticos organizados, cada uno de los cuales propone su propia política al electorado, ha dado lugar en el Parlamento a divisiones políticas claras, que se consideran fundamentales para un gobierno democrático. Aunque el sistema de partidos ha existido de una forma u otra desde el siglo XVIII, su estructura actual no empezó a definirse hasta finales del siglo XIX. Cada vez que se convocan elecciones generales (o parciales), los partidos pueden presentar candidatos, pero también puede presentarse a las elecciones cualquier ciudadano que lo desee. Al optar el día de los comicios por unos u otros candidatos, el electorado indica cuál de las políticas propuestas desearía que se aplicase. El candidato que más votos obtiene queda elegido, pero no se requiere una mayoría absoluta.

34. Desde 1945, el Partido Conservador ha ganado ocho elecciones generales, seis el Partido Laborista. La gran mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes han representado a uno u otro de esos dos partidos. En las elecciones generales de abril de 1992 se presentaron candidatos en las 651 circunscripciones de Gran Bretaña. En Inglaterra, Gales y Escocia, el Partido Laborista y el Partido Conservador presentaron candidatos a los 634 escaños vacantes. El Partido Liberal Demócrata presentó 632 candidatos; el Partido Nacional Escocés se presentó en las 72 circunscripciones de Escocia, mientras que el Plaid Cymru (nacionalistas galeses) se presentó en las 38 circunscripciones de Gales.

El Gobierno y la oposición

35. Por convenio constitucional la Soberana invita a formar gobierno al jefe del partido que más escaños (pero no necesariamente más votos) ha obtenido en una elección general, o que cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes. En ciertas ocasiones, cuando ningún partido ha conseguido esa mayoría, puede formarse un gobierno minoritario.

36. El Primer Ministro elige un equipo de ministros y forma un gabinete de unos 20 miembros, cuyo nombramiento propone a la Soberana como Ministros de la Corona. Juntos constituyen el Gobierno de Su Majestad.

37. El segundo partido, por el número de escaños obtenidos, es oficialmente reconocido como "la oposición de Su Majestad" (o "la oposición oficial") y tiene su propio jefe y su propio "gabinete paralelo", cuyos miembros actúan como portavoces sobre los temas que son de la incumbencia de cada uno de los ministros del Gobierno. Los miembros del Parlamento pertenecientes a otros partidos, así como los miembros independientes de la Cámara, apoyan o se oponen al Gobierno según las opiniones de su partido o las suyas propias.

38. El Gobierno es el principal responsable del control y la organización de las labores de ambas cámaras, tiene la iniciativa en materia de política general e indica, por ende, las decisiones que a su juicio debe adoptar el Parlamento, explicando y defendiendo su posición en debate público. A diferencia de los gobiernos del pasado, que se veían con frecuencia obligados a retirar medidas bajo la presión de miembros de su propio partido, la mayoría de los gobiernos actuales suelen contar con el voto de sus partidarios en la Cámara de los Comunes, por lo que, dependiendo de la mayoría global que hayan conseguido, pueden lograr la aprobación de sus proyectos de ley sin grandes modificaciones. Esta evolución, que es resultado de una mayor disciplina de partido, no sólo ha fortalecido la acción de Gobierno, sino que además ha realzado el papel de la oposición. A la oposición incumbe ahora, en efecto, la función de crítica como medio de presión, función que debe y se le da la oportunidad de desempeñar exponiendo, con arreglo a la práctica establecida en ambas cámaras, sus propios puntos de vista.

El control parlamentario del poder ejecutivo

39. El control sobre el Gobierno se ejerce en definitiva mediante la facultad que tiene la Cámara de los Comunes de obligarle a dimitir aprobando para ello una resolución de "censura", rechazando una propuesta que el Gobierno estime tan fundamental para la aplicación de su política que haya hecho de ella "cuestión de confianza" o negándose a aprobar las asignaciones de recursos que se requieran para la administración pública.

40. Como representante de los simples ciudadanos, todo miembro del Parlamento puede poner en tela de juicio la política propuesta por un ministro:
i) interviniendo en el debate sobre determinado proyecto de ley, ya en segunda lectura formulando objeciones a sus principios generales, ya como habitualmente sucede, proponiendo enmiendas cuando el proyecto está siendo

examinado por el comité correspondiente; ii) mediante el mecanismo de las interpelaciones parlamentarias; iii) durante los debates que se celebran con ocasión de la suspensión de los períodos de sesiones; o iv) durante los debates reservados para iniciativas de la oposición (Opposition days). Además, los comités especiales de la Cámara de los Comunes se encargan del seguimiento estricto de los gastos, la administración y la política de los principales ministerios del Gobierno.

Las interpelaciones parlamentarias

41. El mecanismo de las interpelaciones en la Cámara de los Comunes, tal como existe en la actualidad, es en gran medida una novedad de este siglo. Hasta bien entrado el siglo XIX, los miembros del Parlamento tenían prácticamente, en cualquier momento del debate ordinario, la posibilidad de dirigirse a la Cámara. Actualmente, las sesiones del Parlamento se dedican esencialmente a examinar los asuntos públicos, estimándose que las interpelaciones constituyen el medio más adecuado para obtener una información (a la que los miembros no tendrían acceso por otra vía) sobre las intenciones del Gobierno, así como el procedimiento más eficaz para exponer y, posiblemente, remediar las irregularidades que los electores pongan en conocimiento de sus representantes. Ocasionalmente, las interpelaciones pueden utilizarse como parte de una campaña colectiva organizada para conseguir un cambio en la política gubernamental; y puede, finalmente, haber interpelaciones "sugeridas", que son aquellas en las que un miembro del Parlamento formula determinada pregunta para dar al ministro responsable la oportunidad de hacer una declaración pública.

42. Si bien la admisión de preguntas se ha venido rigiendo fundamentalmente por convenios basados en las decisiones adoptadas por sucesivos Speakers con ocasión de interpelaciones concretas, un comité especial de la Cámara de los Comunes examina periódicamente la práctica y el procedimiento del mecanismo de interpelación.

B. La aplicación de las leyes

La administración

43. En las jurisdicciones del Reino Unido (es decir, en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte), la magistratura es independiente del Gobierno en sus funciones judiciales y no está sujeta a dirección ni control ministeriales. Los más altos cargos de la magistratura son nombrados por la Reina, previa recomendación del Primer Ministro. Otros nombramientos que también competen a la Reina se hacen por recomendación del Lord Chancellor (Lord Canciller), en el caso de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y del Secretario de Estado para Escocia (con asesoramiento del Lord Advocate (Procurador General)), en el de Escocia. El Lord Canciller nombra personalmente a una amplia variedad de funcionarios a tiempo completo y a tiempo parcial en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, algunos de los cuales ejercen también jurisdicción en Escocia.

Inglaterra y Gales

44. El Lord Canciller es el jefe del poder judicial en Inglaterra y Gales (y a veces actúa como juez en la Cámara de los Lores). En el Gobierno, el Lord Canciller es el ministro en el que recae la responsabilidad general de la labor de los tribunales ingleses y galeses y de algunos tribunales administrativos. Sin embargo, todos los aspectos prácticos de los tribunales superiores son responsabilidad del jefe ejecutivo del Court Service (Servicio de los Tribunales). En Inglaterra y Gales, los magistrates' courts (tribunales de magistrados) son un servicio aparte, administrado localmente, bajo la dirección de los magistrates' courts committees (comités de los tribunales de magistrados), pero la ley confiere al Lord Canciller varias responsabilidades importantes respecto de ellos, por ejemplo la financiación de los tribunales, la elaboración de normas para la constitución y el funcionamiento de los comités, la aprobación del nombramiento de los asesores judiciales y la recaudación de los ingresos en concepto de multas y derechos. El Lord Canciller nombra a los jueces y magistrados y tiene la responsabilidad ministerial de los sistemas de asesoramiento y asistencia letrada en Inglaterra y Gales. También tiene a su cargo la aplicación práctica de la reforma del derecho civil en esos países.

45. En Inglaterra y Gales hay aproximadamente 1.100 jueces y oficiales judiciales a tiempo completo. Además, hay unos 1.250 jueces auxiliares y ayudantes de jueces auxiliares, abogados en ejercicio que trabajan a tiempo parcial, alrededor de un mes por año cada uno, en el Crown Court (Tribunal de la Corona) y en los county courts (tribunales de condado). Algunos abogados experimentados también actúan de vez en cuando como suplentes de los jueces del Tribunal Superior, y otros abogados trabajan a tiempo parcial en los tribunales de condado como suplentes de los jueces de distrito. Asimismo, hay aproximadamente 30.000 jueces de paz, no profesionales, que ejercen sus funciones en los tribunales de magistrados de todo el país. Se trata de ciudadanos comunes, que dedican parte de su tiempo a administrar la justicia local (sin percibir remuneración alguna). Por lo general, forman tribunales de tres personas, y un oficial con formación jurídica les asesora en los asuntos de derecho. Así pues, una característica notable de la administración de justicia en el país es que a un pequeño número de jueces profesionales se suma un gran número de jueces legos que se hacen cargo de la gran mayoría de los juicios por delitos menores.

46. Un principio cardinal del sistema es que, en el ejercicio de su función judicial, todos los jueces son completamente independientes. Ello significa que los mundos político y judicial han de mantenerse a distancia. Es inevitable y oportuno que el Parlamento y el poder ejecutivo examinen a fondo la legislación y la aplicación de la ley en los tribunales. Pero es también una convención generalmente aceptada que los parlamentarios y los políticos no deben criticar las decisiones judiciales, pese a que el Parlamento tiene la facultad de anular por ley sus efectos generales. Cuando el Lord Canciller recibe cartas de parlamentarios que expresan quejas por alguna decisión judicial en nombre del público, siempre deja en claro, en su respuesta, que su posición constitucional le prohíbe, al igual que a cualquier otro ministro, intervenir en esos asuntos. Así como el Parlamento

y el poder ejecutivo no deben inmiscuirse en la esfera judicial, a la inversa, los jueces deben distanciarse de la política. Los jueces a tiempo completo no pueden ser miembros de la Cámara de los Comunes, y los Lords of Appeal in Ordinary y demás jueces de alta categoría que son miembros de la Cámara de los Lores por lo general sólo participan en los trabajos de la Cámara que se relacionan con asuntos jurídicos.

47. El Ministro del Interior se ocupa del derecho penal, de los servicios de policía, de las prisiones y de los servicios de libertad condicional y atención poscarcelaria en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. La política penitenciaria y la administración de los centros penitenciarios son funciones que incumben al Servicio de Prisiones de la Corona, organismo ejecutivo del Ministerio del Interior. El Ministro del Interior nombra para cada establecimiento penitenciario una junta de visitantes que representa a la comunidad local y que vigila las condiciones del establecimiento de que se trate, así como su administración y el trato que en él se da a los reclusos. Tiene además que informar al Ministro del Interior acerca de cualquier abuso o motivo de preocupación de que tenga noticia. Las cárceles son inspeccionadas por el Inspector Principal de Prisiones de la Corona, nombrado por el Ministro del Interior, al que rinde cuentas directamente. Todos los informes, incluso los que contienen críticas, son tomados muy en serio tanto por los ministros como por el Servicio de Prisiones. El Ministro del Interior nombra también al Defensor del Pueblo encargado de las prisiones cuya función es investigar las quejas de los reclusos y formular las recomendaciones que le parezcan necesarias como resultado de esas investigaciones. El Defensor también rinde cuentas directamente al Ministro del Interior. Una junta especial de libertad condicional asesora al Ministro del Interior acerca de la puesta en libertad de los presos bajo palabra.

48. La responsabilidad del trato de los delincuentes menores de 18 años incumbe a los Ministerios del Interior y de Salud.

49. El Ministro del Interior aconseja asimismo a la Reina sobre si hay motivos excepcionales para ejercer la prerrogativa real del indulto, por ejemplo, en ausencia de una solución jurídica, para conceder el perdón a un condenado o para remitir la totalidad o parte de la pena que le haya impuesto un tribunal. Las responsabilidades del Ministro del Interior en lo que respecta a la prerrogativa real abarcan Inglaterra y Gales. Los Secretarios de Estado para Escocia e Irlanda del Norte tienen responsabilidades análogas.

50. El Attorney General (Procurador General) y el Solicitor General (Fiscal General) son los principales asesores del Gobierno en materia de derecho inglés y representan a la Corona en las causas nacionales e internacionales pertinentes. Ambos son abogados experimentados y miembros por elección de la Cámara de los Comunes, y tienen rango ministerial. El Procurador General, que lo es también de Irlanda del Norte, además de ejercer diversas funciones en el campo de lo civil, es el máximo responsable de la aplicación de las leyes penales y supervisa, por otra parte, la actuación del Director of Public Prosecutions (Director del Ministerio Público). A él le incumbe, también, tramitar ciertos tipos de procedimientos

penales, en los que debe actuar con absoluta independencia y sin dejarse influir por sus colegas del Gobierno. El Fiscal General es, por su parte, el suplente del Procurador.

Escocia

51. El sistema jurídico escocés es distinto del del resto del Reino Unido. El Secretario de Estado para Escocia se ocupa del procedimiento judicial en Escocia y recomienda la designación de todos los jueces, con excepción de los de más alta categoría, nombra al personal del High Court of Justiciary (Alto Tribunal de Justicia) y del Court of Session (Tribunal Supremo), y se encarga de la composición, la dotación de personal y la organización de los sheriff Courts (tribunales de condado) escoceses. La dotación de personal y la administración de los district courts (tribunales de distrito) incumbe a las autoridades locales. El Secretario de Estado es también responsable del derecho penal de Escocia, de la prevención del delito, de los servicios de policía y del sistema penal, y para todo lo referente a la libertad condicional cuenta con el asesoramiento de la junta escocesa de libertad condicional. El Secretario de Estado es responsable también de la asistencia letrada en Escocia. Las funciones de la administración de los tribunales, incluidas las de asignar los casos a los sheriffs (los jueces titulares de primera instancia) y velar por que se tramiten de forma expedita corren a cargo de las máximas autoridades judiciales, que en Escocia son el Lord President of the Court of Session (Presidente del Tribunal Supremo) (también el Lord Justice General de Escocia) y el Sheriffs Principal, jefe de los jueces titulares de primera instancia de los Sheriffdoms, circunscripciones judiciales basadas en los condados, que son seis.

52. El Procurador General y el Fiscal General de Escocia son los asesores jurídicos superiores del Gobierno para los asuntos escoceses y los principales representantes de la Corona para todo lo referente a los litigios en ese país. Ambos son ministros del Gobierno. El Procurador General se ocupa de todas las cuestiones de política y administración de justicia y es responsable de los redactores parlamentarios de proyectos de ley en Escocia. Asume también la plena responsabilidad del enjuiciamiento de los delitos y, aunque ocupa un puesto ministerial, tiene que actuar con absoluta independencia en el desempeño de sus funciones.

Irlanda del Norte

53. En Irlanda del Norte, la administración de todos los tribunales incumbe al Lord Canciller, mientras que la Dirección de Irlanda del Norte, que depende del Secretario de Estado, tiene a su cargo la policía y el sistema penal. El Lord Canciller es responsable en general del sistema de asesoramiento y asistencia letrada en Irlanda del Norte.

El derecho penal

54. En Inglaterra y en Gales, la decisión inicial de entablar un procedimiento penal incumbe normalmente a la policía. Una vez que la policía formula una inculpación, el caso se transmite al Crown Prosecution Service

(Servicio Procesal de la Corona), el cual decide si ha de ser aceptado para su enjuiciamiento por los tribunales o si debe interrumpirse el procedimiento. En Escocia es el ministerio público el que decide si se entabla o no un procedimiento. En Irlanda del Norte existe un Director del ministerio público. En Inglaterra y Gales (y excepcionalmente en Escocia) también los particulares pueden iniciar un procedimiento penal. La policía puede hacer amonestaciones y, en Escocia, el fiscal tiene varias alternativas al enjuiciamiento, entre ellas la de amonestar y la de remitir los casos al Departamento de Servicios Sociales.

55. En abril de 1988 se estableció, como departamento gubernamental, la Dirección de Delitos Graves de Fraude, que investiga y enjuicia los casos más graves y complejos de fraude en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Una dependencia parecida, la Crown Office Fraud and Specialist of Services Unit, investiga esos casos en Escocia.

Inglaterra y Gales

56. La Prosecution of Offences Act (Ley de enjuiciamiento penal) de 1985 estableció en Inglaterra y Gales el Servicio Procesal de la Corona, cuyo jefe, que es el Director del ministerio público, asume la responsabilidad del enjuiciamiento de la mayoría de los delitos penales ante los tribunales de magistrados y ante el Crown Court (Tribunal de la Corona). El Servicio está dividido en 13 zonas y un área no geográfica, que se conoce con el nombre de Central Casework (Fichero Central) y tiene sede en Londres y York. Cada zona está dirigida por un fiscal superior de la Corona, nombrado por el Director del ministerio público. El Servicio facilita abogados para la vista de los casos en los tribunales de magistrados e instruye a los letrados que han de actuar en el Tribunal de la Corona. Aunque la mayoría de los casos se tramitan en la región en que se plantean, algunos se delegan al Central Casework: se trata de los casos de importancia nacional, excepcionalmente difíciles o que son causa de gran preocupación pública, así como de aquellos en los que es necesario evitar cualquier sospecha de influencia local. Se incluyen entre ellos los delitos de terrorismo, los de violación de las leyes sobre los secretos de Estado, los casos de corrupción y algunos delitos cometidos por agentes de la policía.

Escocia

57. El Procurador General de Escocia, que ejerce sus funciones a través de la Crown Office (Cancillería de la Corona) y del Procurator Fiscal Service (la Fiscalía), es responsable de las causas que se sustancian ante el Alto Tribunal de Justicia y ante los tribunales de condado y de distrito. No existe ningún derecho general de iniciación de un proceso ante los tribunales por los particulares; con pequeñas excepciones, sólo el Procurador General, sus suplentes o los fiscales, que son sus representantes en el plano local, pueden perseguir de oficio los delitos. El asesor permanente del Procurador General de Escocia para las cuestiones procesales es el Crown Agent (Abogado de la Corona), que es el jefe de la Fiscalía, y que en la Cancillería de la Corona cuenta con la asistencia de un grupo de funcionarios públicos con formación jurídica y con experiencia como fiscales

adjuntos. Del enjuiciamiento de las causas en el Alto Tribunal se encargan el fiscal y los oficiales de la Cancillería, mientras que el proceso en sí incumbe al Procurador General, al Fiscal General para Escocia (suplente ministerial del Procurador General) y a abogados suplentes, que, colectivamente, constituyen la Asesoría Jurídica de la Corona. La preparación y el encausamiento de los delitos juzgados por los tribunales de condado y de distrito incumben a los fiscales, quienes deciden si procede, o no, en interés público, iniciar el procedimiento, ateniéndose a las directrices del Procurador General.

58. Conforme a la Ley de enjuiciamiento penal (Escocia) de 1995, el fiscal puede, en el caso de ciertos delitos de menor cuantía, hacer al presunto delincuente una oferta condicional de pena fija, en lugar del encausamiento: el delincuente no está obligado a aceptar esa oferta, pero, si lo hace, el ministerio público pierde su derecho a iniciar el proceso.

Irlanda del Norte

59. En Irlanda del Norte, el Director del ministerio público, que depende del Procurador General, persigue todos los delitos que hayan sido objeto de inculpación y puede hacerlo también en las causas sumarias graves. De otros casos sumarios entiende, en cambio, la policía.

Los tribunales penales

Inglaterra y Gales

60. Los delitos penales pueden agruparse en tres categorías. Los delitos que sólo pueden juzgarse previo procesamiento, esto es, los delitos muy graves, como el asesinato, el homicidio, la violación y el robo, sólo pueden ser juzgados por el Tribunal de la Corona, presidido por un juez, con la asistencia de un jurado. Los delitos a los que se aplica el procedimiento sumario, que son los delitos menos graves y que constituyen la gran mayoría de las infracciones penales, son juzgados por jueces no profesionales y no remunerados, sin jurado. Una tercera categoría de delitos (como el hurto, el allanamiento de morada o las lesiones intencionadas), conocidos con el nombre de "delitos de tipo intermedio", pueden ser juzgados ya sea por jueces legos o por el Tribunal de la Corona, según las circunstancias de cada caso y los deseos del acusado.

61. Además de ocuparse de los delitos de procedimiento sumario y de los delitos "de tipo intermedio" que se les confían, los tribunales de magistrados remiten casos al Tribunal de la Corona, ya sea para la continuación del proceso o para la sentencia. Se remiten para la continuación del proceso aquellos delitos que sólo pueden juzgarse previo procesamiento y los delitos "de tipo intermedio" respecto de los cuales el acusado haya elegido el juicio, o que se haya decidido someter al Tribunal de la Corona. Se remiten, en cambio, para sentencia aquellos casos "de tipo intermedio" en que el acusado ha sido juzgado sumariamente pero que el juzgado ha decidido someter al Tribunal de la Corona para sentencia.

62. Normalmente, las vistas son públicas y tienen acceso a ellas los medios de información. El tribunal está integrado en general por tres jueces no profesionales, denominados jueces de paz, que son asesorados en cuestiones de derecho y procedimiento por un letrado o por un auxiliar igualmente calificado. La designación de los jueces incumbe al Lord Canciller, excepto en Lancashire, en la zona metropolitana de Manchester y en Mersey, donde los nombramientos competen al Canciller del Ducado de Lancaster. Hay actualmente unos 30.000 jueces no profesionales.

63. Hay, además, 90 estipendiarios, magistrados profesionales que desempeñan un trabajo retribuido a tiempo completo, que pueden juzgar una causa solos y que generalmente presiden tribunales en zonas urbanas en las que hay mucho trabajo.

64. Los casos en que están implicados menores de 18 años se ven ante los tribunales de menores. Son éstos tribunales de magistrados especialmente constituidos que, o bien actúan con independencia de los demás tribunales, o bien entienden de esos casos en diferente momento. Sólo pueden estar presentes ciertas categorías de personas, y los medios de información no pueden publicar el nombre de ningún menor que esté implicado, ya sea como acusado o como testigo. Cuando un menor de 18 años es acusado junto con una persona de esos años o más, la causa se ve en un tribunal de magistrados ordinario o en el Tribunal de la Corona. Si el menor es declarado culpable, el tribunal puede transferir el caso para sentencia a un tribunal de menores, a menos de que esté convencido de que no procede hacerlo.

65. El Tribunal de la Corona se ocupa de las causas más graves, de la condena de los delincuentes que le son remitidos para sentencia por los tribunales de magistrados y de los recursos de apelación contra las decisiones de estos últimos. Hay tribunales de este tipo en unos 90 centros, y su presidencia está confiada a jueces del Alto Tribunal de Justicia, a jueces territoriales (circuit judges) o a jueces auxiliares (recorders) que trabajan a tiempo parcial. Todos los juicios contradictorios se ven ante un jurado. Para el examen de los recursos y de los casos pendientes de sentencia, los jueces se reúnen en audiencia con un juez territorial o con un juez auxiliar.

66. Los casos de fraude grave o complejo pueden tratarse con arreglo a procedimientos especiales que no incluyen la fase de instrucción en los tribunales de magistrados cuando así lo considera oportuno el ministerio público, pero con un procedimiento especial que permita al acusado solicitar del Tribunal de la Corona su absolución aduciendo que la acusación carece de fundamento. El procedimiento se aplica también a algunos casos en que hay niños implicados.

67. Toda persona condenada por un tribunal de magistrados puede apelar al Tribunal de la Corona de la sentencia que se le ha impuesto si se ha confesado culpable, o de la condena o sentencia dictada en su contra, si ha negado la acusación. Cuando la apelación se refiere a una cuestión de derecho o de jurisdicción, el fiscal o el acusado pueden recurrir al Alto Tribunal de Justicia. Los recursos contra las decisiones del Tribunal de la Corona, ya se refieran al fallo condenatorio o a la pena impuesta, se dirigen

al Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal). La Cámara de los Lores es la última instancia de apelación para todos los casos, ya sea que procedan del Alto Tribunal de Justicia o del Tribunal de Apelación. Para que un caso pueda llegar a la Cámara de los Lores, el tribunal que haya conocido del recurso anterior ha de certificar que en él se ha planteado una cuestión de derecho de importancia pública general y, o bien ese tribunal o la propia Cámara de los Lores, deben autorizar la sustanciación del recurso ante ésta. De los recursos interpuestos ante la Cámara de los Lores se ocupan los nueve Lords of Appeal in Ordinary o magistrados de dicha Cámara.

68. Cuando una persona haya sido procesada sobre la base de un auto de acusación formal (indictment) y absuelta (ya sea respecto de toda la acusación o solamente de partes de ella), el Procurador General puede solicitar la opinión del Tribunal de Apelación sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en el caso. Antes de dar su opinión sobre la cuestión remitida, el Tribunal debe oír los argumentos del Procurador General, presentados por él personalmente o en su nombre. La persona absuelta también tiene derecho a exponer sus argumentos por conducto de su abogado. Sea cuál sea la opinión expresada por el Tribunal de Apelación, la sentencia absolutoria original no resulta afectada. Por vía de referencia, el Procurador General puede obtener un fallo que ayude al ministerio público en casos futuros, pero no puede pedir al tribunal que revoque la absolución del acusado cuyo proceso dio lugar a la referencia. La cuestión puede remitirse también a la Cámara de los Lores, si el Tribunal de Apelación estima que debe ser examinado por los Lores magistrados de esa Cámara.

69. El Procurador General puede también remitir una causa al Tribunal de Apelación si considera que la sentencia dictada por el juez del Tribunal de la Corona es excesivamente benigna o ilegal. Esta facultad concierne a los delitos graves y muy graves, los atentados contra el pudor o las amenazas de muerte, la crueldad o la negligencia respecto de niños y los fraudes graves o complejos. El Tribunal de Apelación debe dar la autorización para remitir la sentencia. Este Tribunal puede casar cualquier sentencia y dictar otra más o menos severa, según considere procedente, pero sin rebasar los límites de las atribuciones del juez del Tribunal de la Corona que impuso la condena original.

Escocia

70. En Escocia, el Alto Tribunal de Justicia juzga todos los delitos graves, como el asesinato, la traición y la violación; los tribunales de condado conocen de los delitos menos graves, y los tribunales de distrito de las faltas. Las causas penales se ven, ya en juicio solemne, cuando el proceso se inicia sobre la base de un auto de acusación formal y el juez actúa acompañado de un jurado de 15 miembros, ya en procedimiento sumario, sin jurado. Todas las causas que se ventilan ante el Alto Tribunal de Justicia y las más graves de las que se confían a los tribunales de condado son resueltas por un juez y un jurado. El procedimiento sumario se aplica a las causas menos graves confiadas a los tribunales de condado y a todas las causas que corresponden a los tribunales de distrito. Las penas máximas

que se pueden imponer varían. Un tribunal de distrito puede imponer hasta 60 días de prisión o una multa máxima de 2.500 libras. Los tribunales de condado, en juicio sumario, pueden imponer hasta 3 meses de prisión y una multa máxima de 5.000 libras. Los magistrados estipendiarios de los tribunales de distrito tienen las mismas facultades que los jueces de condado que actúan en juicio sumario. Los jueces de condado que actúan acompañados de un jurado pueden imponer una pena de prisión de hasta 3 años o una multa sin limitación de importe. El Alto Tribunal de Justicia puede imponer hasta la pena de prisión perpetua y una multa sin limitación de importe. Desde el punto de vista administrativo, los tribunales de distrito dependen de las autoridades locales; los jueces son jueces de paz, no profesionales, y las autoridades locales pueden designar de oficio hasta la cuarta parte de sus miembros elegidos para que sean jueces. En Glasgow hay cuatro magistrados estipendiarios a tiempo completo y cinco sustitutos. Se trata de abogados remunerados, a tiempo completo, cuya jurisdicción penal es equivalente a la de un juez de condado que actúe en juicio sumario.

71. Los menores de 16 años que hayan cometido un delito o a los que, por otras razones especificadas por la ley, se considere que es necesario aplicar ciertas medidas coercitivas de custodia o protección serán juzgados normalmente por un tribunal de menores, integrado por tres miembros seleccionados de un total de 1.800 voluntarios nombrados por el Secretario de Estado una vez terminada la formación necesaria. En cada audiencia deben estar representados ambos sexos. Si no se aceptan los motivos para remitir a una audiencia, el juez de condado debe decidir sobre su validez. Después de la vista, el niño o sus padres pueden recurrir el fallo en los 21 días siguientes. Este recurso se presenta también ante un juez de condado. Un pequeño número de niños que han cometido delitos graves puede ser procesado todavía en el marco del sistema de justicia penal para los adultos.

72. En Escocia, los seis sheriffdoms (circunscripciones judiciales basadas en los condados) se dividen en distritos judiciales, cada uno de los cuales tiene uno o más sheriffs, que son los jueces del tribunal. El Tribunal de Apelación de lo Penal, tribunal supremo de lo penal en Escocia, funciona a la vez como tribunal de primera instancia y como tribunal de apelación. Cualquiera de los jueces que a continuación se enumeran puede actuar en el Alto Tribunal: el Lord Justice General (presidente del tribunal), el Lord Justice Clerk (vicepresidente del tribunal) o uno de los Lord Commissioners of Justiciary (vocales). La sede del tribunal está en Edimburgo, pero el Alto Tribunal puede también actuar en otras ciudades.

73. El Alto Tribunal en Edimburgo se ocupa asimismo de todos los recursos de apelación. Tanto en el caso de procedimiento normal como en el de procedimiento sumario, existe la posibilidad de apelar de la declaración de culpabilidad de la sentencia o de ambas. En caso de anulación del fallo, el tribunal puede autorizar la revisión de la causa en un nuevo juicio. No existe posibilidad de apelación ulterior a la Cámara de los Lores. En los procesos sumarios el fiscal puede apelar basándose en una cuestión de derecho, contra la absolución o la sentencia. El Procurador General de Escocia puede pedir al Alto Tribunal su opinión sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en una causa en la que el procesado contra el

que se haya dictado auto formal de acusación haya resultado absuelto. Esa gestión no afecta, sin embargo, al fallo absolutorio dictado en la causa original.

Irlanda del Norte

74. Los tribunales de Irlanda del Norte tienen, en general, una estructura semejante a la de los tribunales de Inglaterra y Gales. El trabajo diario de tramitación sumaria de los casos de menor cuantía incumbe a los tribunales de magistrados presididos por un juez residente, con formación jurídica, que trabaja a tiempo completo. Los delincuentes menores de 17 años y los menores de 17 años en general que requieran cuidados, protección y control comparecen ante los tribunales de menores, integrados por el juez residente y dos asesores no profesionales (uno de los cuales, como mínimo, ha de ser una mujer) especialmente capacitados para ocuparse de esos menores. De los recursos contra los fallos de los tribunales de magistrados entienden los tribunales de condado.

75. El Tribunal de la Corona se ocupa de las causas penales en las que ya ha habido auto de acusación. Los jueces de ese tribunal proceden del Alto Tribunal o de los tribunales de condado. El juicio tiene lugar ante un solo juez, y todas las causas controvertidas que no sean las que conciernen a delitos especificados en la legislación de emergencia se someten también a la consideración de un jurado.

76. La vista de las causas que guardan relación con la legislación de emergencia por un tribunal unipersonal ("Diplock court") se hizo necesaria porque los miembros del jurado eran objeto de intimidación. El tribunal debe observar todos los principios pertinentes a los juicios penales: el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio de los testigos, la carga de la prueba para el ministerio público, que debe demostrar la culpabilidad fuera de toda duda razonable, el derecho del acusado a pedir asesoramiento jurídico y a ser representado. Si hay fallo condenatorio, el juez debe motivarlo por escrito, y existe el derecho automático a recurrir, por cuestiones de derecho y de hecho, ante un tribunal de apelación integrado por tres jueces.

77. De los recursos contra los fallos condenatorios o las sentencias dictadas por el Tribunal de la Corona entiende el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte. Los procedimientos para la interposición de recursos ante la Cámara de los Lores son similares a los vigentes en Inglaterra y Gales.

Los procesos penales

El juicio

78. En el Reino Unido, los juicios penales se basan esencialmente en un debate contradictorio entre el ministerio fiscal y la defensa. Dado que la ley presume la inocencia de todo acusado mientras no se haya demostrado su culpabilidad, el ministerio público no goza de ninguna ventaja, ni real ni aparente, sobre la defensa. El acusado (defendant y, en Escocia,

accused), tiene derecho a utilizar los servicios de un abogado y puede, si es necesario, ser asistido por un defensor de oficio pagado con cargo a los fondos públicos. En caso de prisión preventiva, el acusado puede recibir la visita de un abogado a fin de preparar debidamente su defensa.

79. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, durante la preparación de la causa y salvo en el caso de cargos de menor cuantía, el ministerio público está obligado a revelar al abogado defensor, ya sea automáticamente o cuando se le solicite, todas las pruebas que se proponga utilizar contra el acusado. El ministerio público debe revelar también cualquier otro elemento que sea pertinente al caso. La Ley de investigaciones y procedimiento penal de 1996 modifica las normas relativas a la obligación de revelar el material no utilizado. Cuando entre en vigor, el ministerio público deberá informar del material que pueda socavar los argumentos de la fiscalía (comunicación primaria) o contribuir a la defensa del acusado (comunicación secundaria). Esta última dependerá de la entrega de una declaración por escrito de los argumentos de la defensa (obligatoria en el Tribunal de la Corona pero voluntaria en los tribunales de magistrados). La falta de presentación de la declaración puede autorizar al tribunal a extraer una conclusión en contra del acusado, si resulta razonable hacerlo. La legislación actual y futura permite no revelar a la defensa y al jurado determinados materiales no utilizados si el tribunal decide que redundaría en el interés público mantener el carácter confidencial de ese material (y si su revelación no es necesaria para la equidad del juicio). En Escocia la ley no exige a la Corona que revele información al abogado defensor, pero éste dispone, con antelación al juicio, de una lista de los testigos y de las pruebas del ministerio público. Los fiscales también tienen el deber general de actuar de manera correcta con el abogado defensor, de revelarle toda información que pueda sustentar la defensa y ayudarle a ponerse en contacto con los testigos.

80. El abogado defensor o el fiscal pueden alegar que el estado mental del acusado hace improcedente su juicio, en cuyo caso, y siempre que el jurado (o, en Escocia, el juez) se pronuncie en ese sentido, se ordena su ingreso en un hospital determinado.

81. Los juicios penales se celebran normalmente en audiencia pública y en ellos se aplican rigurosamente las normas referentes a la presentación de pruebas relacionadas con los hechos. En caso de admisión de pruebas improcedentes, puede anularse la sentencia en segunda instancia. Durante el juicio, el acusado tiene derecho a escuchar las declaraciones de los testigos de cargo y a proceder a su contrainterrogatorio, normalmente a través de un abogado; a hacer comparecer a sus propios testigos, a los que puede legalmente obligarse a comparecer si no lo hicieren a título voluntario; y a dirigirse al tribunal, ya sea personalmente o por conducto de un abogado. El defensor tiene en todo caso derecho a ser el último que hable en el juicio. El acusado no puede ser interrogado si previamente no ha consentido en declarar bajo juramento como testigo en defensa propia. En caso de que preste testimonio, no podrá, sino en circunstancias excepcionales, ser objeto de contrainterrogatorio respecto de su persona y conducta; por lo general, el ministerio público no recurre a ese testimonio.

82. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, la Ley de procedimiento penal de 1987 prevé que en los casos graves o complejos de fraude haya una audiencia pública preparatoria ante el Tribunal de la Corona, en la que el juez puede resolver las cuestiones de derecho que se le planteen y definir los puntos que deban someterse a la consideración del jurado.

El jurado

83. En los juicios con jurado, el juez resuelve las cuestiones de derecho, resume las pruebas para mejor información del jurado y da a éste instrucciones sobre la legislación pertinente, y finalmente absuelve al acusado o dicta contra él sentencia condenatoria. Sólo el jurado puede decidir si el acusado es o no culpable. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, si el jurado no llega a un veredicto unánime, el juez puede pedirle que dé su veredicto por mayoría siempre que, en el jurado normal constituido por 12 personas, no haya más de 2 disidentes. En Escocia, donde el jurado está constituido por 15 personas, el veredicto puede pronunciarse por mayoría simple, pero, por regla general, nadie puede ser declarado culpable sin pruebas corroborantes. Si el veredicto del jurado es de inocencia (not guilty o, en Escocia, not proven, que es otro posible veredicto de "absuelto de culpa y cargos"), el fiscal no tiene derecho a apelar, y el acusado no puede ser juzgado de nuevo por el mismo delito. En cambio, si el veredicto es de culpabilidad (guilty), el acusado tiene derecho a interponer recurso ante el tribunal competente.

84. El jurado es totalmente independiente del poder judicial. Todo intento de injerencia en la labor del jurado, una vez que ha prestado juramento, es punible en virtud de la Contempt of Court Act (Ley de desacato a los tribunales) de 1981.

85. El ministerio público y la defensa tienen derecho a recusar a las personas propuestas para un jurado exponiendo sus motivos, cuando estimen que un miembro del jurado pueda estar predispuesto en un sentido o en otro. El derecho de recusación no es automático. La Ley de procedimiento penal (de Escocia) de 1995 abolió el derecho de recusación sin causa en Escocia.

86. Todas las personas de 18 a 70 años de edad cuyo nombre aparezca en el registro electoral, con algunas excepciones, pueden tener que actuar como jurados tras elección al azar de sus nombres. Las personas de 65 a 70 años pueden quedar eximidas. No son elegibles como jurados los miembros de la judicatura, los clérigos, las personas que en los diez años anteriores hayan ejercido la abogacía, los miembros de la Secretaría del Lord Canciller o de los servicios de policía, prisiones y libertad condicional, ni las personas que padecen determinadas enfermedades mentales. Están, por otra parte, inhabilitadas para actuar como jurados las personas que, dentro de los diez años anteriores, hayan estado cumpliendo cualquier parte de una pena de prisión, reclusión en un reformatorio para menores o detención, o hayan estado sometidas a una orden de servicio a la comunidad, o las que, dentro de los últimos cinco años, hayan estado en régimen de libertad condicional. Toda persona que haya sido condenada a cinco años o más de privación de libertad está descalificada para toda la vida.

La investigación de los casos de muerte

87. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, los coroners investigan los casos de muerte violenta o sospechosa cuya causa se desconoce. Tales casos pueden ser puestos en conocimiento del coroner local (que puede tener formación médica o jurídica, o ambas) por los médicos, la policía, el registrador judicial o las autoridades públicas, o por particulares. Cuando la muerte ha sido repentina y por causa desconocida, el coroner no necesita llevar a cabo una investigación si, como resultado de la autopsia, llega a la conclusión de que la muerte se ha debido a causas naturales. Cuando haya motivos para creer que se trata de muerte violenta o sospechosa, o cuando la muerte se haya producido en la cárcel o en otras circunstancias especificadas, el coroner procederá a una investigación y determinará, en el ejercicio de sus facultades judiciales, cómo, cuándo y por qué se ha producido esa muerte. El coroner puede desempeñar sus funciones solo o en determinadas circunstancias, con la asistencia de un jurado. Ni el coroner ni su jurado pueden expresar opinión alguna sobre cuestiones de responsabilidad penal y civil, que son de la competencia de otros tribunales.

88. En Escocia, el fiscal local investiga todas las muertes repentinas y sospechosas, y puede comunicar los resultados a la Cancillería de la Corona (Crown Office). En un número reducido de casos, la investigación sobre una muerte accidental puede efectuarse ante el sheriff (representante de la Corona en el condado). En ciertas categorías de casos, como los de muerte en prisión, la investigación es obligatoria. Además, en aquellos casos en que las circunstancias hayan sido motivo de inquietud para la población, el Procurador General puede, si lo estima procedente y de interés público, instruir una investigación.

El Derecho civil

89. Las principales subdivisiones del derecho civil en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte son: el derecho de familia, el derecho patrimonial, el derecho contractual y el derecho de agravios o de responsabilidad civil extracontractual (torts), que comprende los daños sufridos por una persona por culpa de otra, independientemente de la relación que exista entre ellas, incluidas figuras tales como las de negligencia, difamación e injerencia ilegal en los bienes o derechos de otro. Otras ramas del derecho civil son el derecho constitucional y administrativo (que se ocupa en particular del ejercicio del poder ejecutivo), el derecho laboral, el derecho marítimo y el derecho eclesiástico. El derecho civil escocés tiene sus secciones propias, en gran medida comparables.

90. En marzo de 1994, el Lord Canciller invitó a Lord Woolf a que realizara una investigación de la justicia civil. Los objetivos del examen eran mejorar el acceso a la justicia reduciendo el costo de los litigios y la complejidad de las normas procesales, modernizando la terminología y eliminando las distinciones innecesarias entre práctica y procedimiento. El informe final de Lord Woolf se publicó en julio de 1996. En octubre de 1996 el Lord Canciller hizo públicos sus planes para llevar a efecto las recomendaciones.

Los tribunales civiles

Inglaterra y Gales

91. Los tribunales de magistrados tienen una jurisdicción civil limitada, que abarca algunas causas del derecho de familia, los casos de molestias o perjuicios causados en violación de la legislación sobre salud pública, y la recaudación de los impuestos municipales relativos a los bienes inmuebles y a la renta, cuando el monto adeudado supera las 2.000 libras, y de los impuestos al Gobierno central. A los comités de magistrados incumbe conceder las licencias necesarias para la apertura de establecimientos de bebidas, locales de apuestas y clubes.

92. La jurisdicción de los 274 juzgados de condado comprende las acciones relativas a contratos y a casos de responsabilidad civil extracontractual (con pequeñas excepciones), las causas sobre fideicomisos e hipotecas y las acciones para la recuperación de tierras. Los casos de reclamaciones que exceden de los límites fijados pueden juzgarse en estos tribunales previo consentimiento de las partes o, en determinadas circunstancias, por haberles sido remitidos por el Alto Tribunal.

93. Entre otras cuestiones de que pueden entender los tribunales de condado figuran los contratos de alquiler-venta, las causas relacionadas con la legislación de alquileres, los litigios entre arrendadores y arrendatarios y la adopción. Los casos de divorcio incumben a los tribunales de esa categoría especialmente designados para tales causas y, fuera de Londres, hay algunos que se ocupan asimismo de los casos de quiebra. También entienden los tribunales de condado de las quejas referentes a discriminación racial y sexual. Para las reclamaciones de menor importancia (en particular las relacionadas con los consumidores) existen servicios especiales de arbitraje y procedimientos simplificados.

94. Todos los magistrados del Tribunal Supremo (que comprende el Tribunal de Apelación, el Tribunal de la Corona y el Alto Tribunal de Justicia), así como todos los jueces territoriales y los jueces auxiliares, pueden actuar en los tribunales de condado, pero cada tribunal tiene uno o más jueces territoriales que le han sido asignados por el Lord Canciller y que son quienes ejercen principalmente su competencia en las sesiones regulares del tribunal. Normalmente, el juez actúa solo, si bien, excepcionalmente y a petición del tribunal, puede ordenar un juicio con jurado.

95. El Alto Tribunal de Justicia está dividido en salas: la Sala de la Cancillería (Chancery Division), la Sala del Tribunal de la Reina (Queen's Bench Division) y la Sala de Familia (Family Division). Tiene jurisdicción tanto en primera instancia como en apelación, y tanto en las causas civiles como en algunas causas penales. En general, se asigna a cada sala un determinado tipo de trabajo. Así, por ejemplo, la Sala de Familia se ocupa de todos los asuntos que se refieren a la institución familiar, incluidos los relativos a la adopción y a la tutela. La Sala de la Cancillería ejerce su competencia en la interpretación de últimas voluntades y en la administración de patrimonios hereditarios. Finalmente, las

cuestiones de derecho marítimo y comercial son de la competencia de los tribunales comerciales y del Almirantazgo, de la Sala del Tribunal de la Reina.

96. Cada uno de los cerca de 80 jueces que integran el Alto Tribunal de Justicia es destinado inicialmente a una sala, pero puede ser trasladado a otra mientras siga en funciones. Fuera de Londres, en donde actúa a través de los Reales Tribunales de Justicia (Royal Courts of Justice), el Alto Tribunal actúa por intermedio de 29 tribunales centrales. Para la vista de las causas en primera instancia, los magistrados del Alto Tribunal actúan solos. Los recursos de apelación en asuntos civiles contra tribunales inferiores se ven en tribunales de dos (o, a veces, tres) jueces, o ante un solo juez de la sala pertinente, designado por el Lord Canciller.

97. En Inglaterra y Gales, los recursos referentes a causas matrimoniales, de adopción y de tutela vistos en los tribunales de magistrados pasan a la Sala de Familia del Alto Tribunal. De los recursos interpuestos contra decisiones de los comités de magistrados en materia de licencias entiende el Tribunal de la Corona. Los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por el Alto Tribunal y por los tribunales de condado se ven ante el Tribunal Superior de Apelaciones (Sala de lo Civil), que está constituido por el Master of the Rolls (Guardián de la Abogacía) y 35 Lores (Lords Justice of Appeal), y pueden llegar hasta la Cámara de los Lores, que es el tribunal final de apelación en todos los casos civiles y penales.

98. Los jueces en la propia Cámara de los Lores son los 11 Lores del Comité de Apelación de dicha Cámara (Lords of Appeal in Ordinary), cuyo quórum mínimo es de 3, pero que por lo general constituyen un grupo de 5 y, a veces, incluso de 7. Por tradición, los miembros de la Cámara que no son juristas no asisten a la vista de los recursos (que normalmente tiene lugar en una sala de reuniones y no en la cámara legislativa), pero pueden participar aquellos que ejercen o han ejercido funciones judiciales superiores. El Presidente de la Cámara de los Lores en su calidad de tribunal es el Lord Canciller.

Escocia

99. Los principales tribunales civiles son los tribunales de condado (sheriff courts) y el Tribunal Supremo (Court of Session). La jurisdicción civil del tribunal de condado abarca casi todos los tipos de acción y no suele estar limitada por la importancia del caso, puesto que el sheriff tiene jurisdicción en prácticamente todas las cuestiones de derecho civil y en todo tipo de procedimiento, a excepción de determinados recursos de apelación y peticiones previstos en la ley que se presentan ante el nobile officium del Tribunal Supremo. Gran parte de la labor es realizada por el sheriff, de cuyas decisiones puede apelarse al sheriff principal, o directamente al Tribunal Supremo. El juez también conoce de varios recursos de apelación y peticiones previstos en la ley, como la apelación de las decisiones de las juntas de concesión de licencias. Esos casos tienen carácter administrativo y se tramitan mediante un procedimiento abreviado, conocido como instancia sumaria.

100. El Tribunal Supremo de Escocia funciona solamente en Edimburgo y tiene en general facultades para ocuparse de todo tipo de acción. La excepción principal es la de las acciones exclusivamente reservadas a los tribunales de condado, cuando el valor de lo reclamado sea inferior a una suma establecida. El Tribunal Supremo está dividido en dos: la Cámara Exterior (Outer House), que es un tribunal de primera instancia, y la Cámara Interior (Inner House), que actúa principalmente como tribunal de apelación. La Cámara Interior se divide a su vez en dos salas que tienen la misma categoría y cada una de las cuales está integrada por cuatro jueces: la primera sala está presidida por el Lord Presidente (Lord President) y la segunda, por el Lord Magistrado Auxiliar (Lord Justice Clerk). En los recursos presentados a la Cámara Interior puede impugnarse tanto las sentencias de la Cámara Exterior como las de los tribunales de condado. De las decisiones de la Cámara Interior puede recurrirse a su vez a la Cámara de los Lores. Los magistrados del Tribunal Supremo son los mismos que los del Alto Tribunal de Justicia. El Lord Presidente del Tribunal Supremo ejerce las funciones del Lord Justice General (Presidente de la Sala de la Corona) en el Alto Tribunal de Justicia. El Tribunal Supremo aplica varios procedimientos especiales para el ejercicio de determinadas acciones, en particular asuntos mercantiles y demandas por daños y perjuicios en casos de lesiones personales y muerte. También está elaborando un nuevo procedimiento general para los casos que la Cámara Exterior examina en primera instancia. Tiene jurisdicción exclusiva en determinados casos internacionales, en particular los relacionados con las convenciones internacionales en materia de raptos y custodia de niños. Algunos de los jueces del Tribunal Supremo desempeñan otras funciones, por ejemplo en relación con los recursos de apelación electorales, las apelaciones de las decisiones de los tribunales y otros organismos, y el Employment Appeal Tribunal (Tribunal de Apelación en materia de Empleo).

101. El Scottish Land Court (Tribunal Escocés de la Tierra) es un tribunal especial que se ocupa exclusivamente de cuestiones referentes a la agricultura. Su presidente tiene la categoría y los derechos de un magistrado del Tribunal Supremo, y los demás miembros son especialistas en agricultura ajenos a la profesión judicial.

Irlanda del Norte

102. En Irlanda del Norte, las causas civiles de menor cuantía se ven en los tribunales de condado, aunque también los tribunales correccionales o juzgados de paz tienen facultad para conocer de algunas categorías. El tribunal superior en lo civil es el Alto Tribunal de Justicia, de cuyas sentencias cabe recurrir al Tribunal de Apelación. Estos dos tribunales, junto con los de la Corona, constituyen la Corte Suprema de Justicia de Irlanda del Norte, cuya práctica y procedimientos son análogos a los de Inglaterra y Gales. La Cámara de los Lores es la última instancia para todas las causas civiles.

El procedimiento civil

Inglaterra y Gales

103. En Inglaterra y Gales es el perjudicado el que inicia la acción civil, no requiriéndose investigación preliminar alguna sobre la autenticidad del perjuicio. El procedimiento que se sigue ante el Alto Tribunal se inicia por lo general con un requerimiento de comparecencia (writ of summons) dirigido por el demandante al demandado y en el que se especifica la naturaleza de la reclamación. El demandado que tiene la intención de oponerse a la demanda se lo hace saber al tribunal. Seguidamente se presentan a éste escritos en los que se expone más detenidamente la cuestión objeto de la controversia (los alegatos). En los tribunales de condado, el juicio se inicia con un auto de comparecencia dirigido al demandado por el tribunal, y el procedimiento ulterior es más sencillo que ante el Alto Tribunal.

104. Las declaraciones de divorcio deben pronunciarse en audiencia pública, pero el procedimiento que se aplica a la mayoría de las causas no controvertidas suprime la necesidad de declarar ante el tribunal y permite la toma en consideración de pruebas escritas, por el secretario del mismo.

105. Los juicios civiles, como asunto privado, pueden por lo general terminar en cualquier momento por desistimiento del demandante o por avenencia entre las partes. Las acciones incoadas ante un tribunal suelen ser juzgadas sin jurado, excepto en los casos de difamación, detención ilegal o encausamiento indebido, casos en los cuales, en circunstancias especiales, cualquiera de las partes puede insistir en que sea un jurado el que se pronuncie, o en los casos de fraude, en los que sólo el demandado puede hacer uso de ese derecho. El jurado se pronuncia sobre las cuestiones de hecho y fija la indemnización de daños y perjuicios que corresponde al perjudicado. Sus conclusiones pueden adoptarse por mayoría.

106. En los juzgados de paz o de instrucción, la acción judicial se inicia con una demanda, basándose en la cual el tribunal puede enviar al demandado un auto de comparecencia. En ese auto se especifican los detalles de la demanda y la fecha en que se verá la causa. Las partes y los testigos prestan declaración en audiencia ante el tribunal. Los juicios acerca de cuestiones de familia son normalmente sustanciados por no más de tres jueces no profesionales, uno de los cuales será, a ser posible, una mujer, y no se permite la asistencia del público. El tribunal puede decidir sobre la guarda, el derecho de visita y la supervisión de los niños, así como sobre el pago de pensiones alimentarias a cónyuges e hijos.

107. El tribunal se encarga también del cumplimiento de la sentencia en las causas civiles. En su mayoría se trata de la entrega de sumas de dinero, que, en caso de impago, puede hacerse efectiva mediante el embargo de los bienes del deudor o mediante una orden judicial que exija al empleador que efectúe pagos periódicos al tribunal deduciéndolos del sueldo del deudor. En otros casos la sentencia consiste en una prohibición judicial en virtud de la cual se impida a alguien realizar un acto ilegal. La negativa a obedecer el fallo de un tribunal puede conducir a la prisión por desacato.

La detención sólo podrá efectuarse en virtud del correspondiente mandamiento judicial. Normalmente, el tribunal condena a la parte que pierde el proceso al pago de las costas del mismo.

Escocia

108. En Escocia, los juicios ante el Tribunal Supremo o las acciones ordinarias ante los tribunales de condado (sheriff courts) se inician con el envío al demandado de un auto de comparecencia en el primer caso, o de una notificación en el segundo. En el Tribunal Supremo, el paso siguiente es la publicación de la acción en las listas del tribunal. Todo demandado que tenga la intención de oponerse a la acción debe informar al respecto al tribunal y, en caso de no comparecencia, el tribunal dicta una declaración de ausencia en favor del demandante. De conformidad con las nuevas disposiciones para el procedimiento ordinario en los tribunales de condado, que entraron en vigor el 1º de enero de 1994, las 12 primeras semanas del procedimiento están sujetas a un calendario estricto, que desemboca en una audiencia en la que el tribunal ofrece a las partes la opción de proceder al debate o a presentar pruebas. El caso comienza con un auto inicial de comparecencia y el demandado tiene que comunicar su intención de contestar la demanda y presentar después elementos de descargo. Antes de esa audiencia hay un período de composición que dura unas ocho semanas. En el procedimiento relativo a los asuntos de familia las partes asisten a la audiencia en las que se presenta la opción y el tribunal puede remitir los casos a mediación. Después de la audiencia se procede a debatir las cuestiones jurídicas o las relativas a la prueba. Existe un procedimiento complementario para la concertación de las alegaciones, aunque raramente se utiliza.

109. El procedimiento sumario del tribunal de condado (en el que se ventilan sumas pequeñas) es menos formal. La exposición de la demanda se incorpora a la notificación, y el procedimiento está previsto de modo que, en la mayoría de los casos, pueda llevarse a cabo sin que las partes implicadas tengan que comparecer en audiencia. Normalmente, ni ellas ni sus representantes tienen que comparecer cuando no hay oposición a la demanda. Ese procedimiento sumario, que en la actualidad corresponde a demandas de una cuantía que oscila de 750 a 1.500 libras, se tramita con arreglo a un calendario fijo y con escasas alegaciones por escrito. Abarca determinadas demandas para obtener el pago de una deuda y para recuperar la posesión de bienes raíces transmisibles por herencia (es decir, para la recuperación de bienes raíces arrendados objeto de garantías transmisibles).

110. En 1988 se introdujo en Escocia un procedimiento para demandas de menor cuantía. En este procedimiento, que es una variante del procedimiento sumario, se prevé que todas las demandas cuya cuantía sea de hasta 750 libras se inicien de manera similar a aquél. Cuando el demandante no esté representado por un abogado, el tribunal lo asesorará para la preparación y notificación de los autos de comparecencia. Aunque el procedimiento en las demandas de menor cuantía es similar al sumario, está sujeto a muy pocas formalidades y se alienta al tribunal a que adopte normas menos estrictas con respecto al procedimiento y a la prueba. En la actualidad hay una audiencia

preliminar en todas las demandas de menor cuantía (cuyo valor, por el momento, no supera las 750 libras), aunque es objeto de revisión. No se dispone de asistencia letrada para ese tipo de demandas y las costas están estrictamente limitadas.

Irlanda del Norte

111. En Irlanda del Norte, el procedimiento es similar al de Inglaterra y Gales. En los tribunales de condado se inicia con la notificación de la demanda; no se presentan en cambio alegatos. Los fallos de los tribunales civiles se hacen efectivos por un procedimiento centralizado de cuya administración se encarga la llamada Oficina de Ejecución de las Sentencias (Enforcement of Judgments Office).

El Tribunal de Prácticas Restrictivas

112. El Tribunal de Prácticas Restrictivas (Restrictive Practices Court) es un tribunal especial del Reino Unido que se ocupa de los monopolios y de las prácticas comerciales restrictivas. De él forman parte cinco jueces y otras diez personas con experiencia industrial, comercial o de relaciones públicas.

Los tribunales administrativos

113. Los tribunales administrativos ejercen asimismo funciones judiciales propias, distintas de los demás tribunales. Por lo general, se constituyen con arreglo a las disposiciones legislativas que rigen su composición, sus funciones y su procedimiento. En comparación con los demás tribunales, suelen ser más accesibles, menos formales y menos onerosos. Por otra parte, están especializados en su particular ámbito de competencia.

114. La expansión del sistema de tribunales administrativos en el Reino Unido es relativamente reciente, ya que la mayoría de ellos se han establecido a partir de 1945. Estos tribunales se pronuncian sobre determinados derechos y obligaciones de los particulares entre sí o en relación con un departamento del Gobierno u otra autoridad pública. Varios tribunales administrativos importantes resuelven controversias entre particulares; así por ejemplo, los tribunales del trabajo desempeñan una función importante en los conflictos laborales. Algunos, como los que se ocupan de la seguridad social, entienden de las quejas presentadas por particulares contra las autoridades públicas. Otro grupo, que incluye los tribunales fiscales, decide sobre las pretensiones -no aceptadas- dirigidas por las autoridades públicas a los particulares, mientras que otros se ocupan de los problemas y litigios que no se refieren directamente a derechos de índole financiera o de responsabilidad civil, como pueda ser el derecho a entrar en el Reino Unido o a visitar el país. Aunque por lo general los departamentos del Gobierno prestan apoyo administrativo a los tribunales en los distintos casos, las decisiones se dictan de manera independiente por el tribunal que aplica la ley a los hechos de un caso concreto.

115. La designación de los miembros de los tribunales administrativos incumbe normalmente al Ministro al que corresponda las cuestiones de que se

trate, pero también otras autoridades tienen facultad para nombrarlos en algunos casos. Por ejemplo, el Lord Canciller (y en Escocia el Lord Presidente del Tribunal Supremo) decide la mayor parte de los nombramientos en que se requieren los servicios de un presidente o de un miembro que sean juristas.

116. En muchas jurisdicciones judiciales se aplica un sistema de dos niveles, con un derecho inicial de apelación a un tribunal inferior y una última instancia de apelación, casi siempre sobre cuestiones de derecho, a un tribunal superior. Contra algunos tribunales superiores cabe asimismo recurrir, sólo sobre cuestiones de derecho, al Alto Tribunal de Justicia en Inglaterra y Gales, al Tribunal Supremo en Escocia y al Tribunal de Apelación en Irlanda del Norte.

117. El Consejo de Tribunales Administrativos (Council on Tribunals), órgano independiente establecido en 1958, se ocupa de la supervisión general de la mayoría de los tribunales de esta índole, prestando su asesoramiento sobre proyectos de leyes y reglamentos, controla sus actividades e informa sobre determinadas cuestiones. Un Comité Escocés del Consejo (Scottish Committee of the Council) ejerce las mismas funciones en Escocia. El Consejo tiene responsabilidades análogas con respecto a las investigaciones públicas.

III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Autoridades competentes en materias relativas a los derechos humanos

118. Con arreglo a la Constitución del Reino Unido, el disfrute de los derechos y libertades fundamentales es inherente a todo miembro de nuestra sociedad. Dichos derechos y libertades pueden sólo restringirse, y eso previa decisión democrática del Parlamento. El papel del Parlamento no es, por lo tanto, conferir tales derechos, sino considerar si es preciso limitarlos, sopesando en cada caso las necesidades de la sociedad frente a las del individuo. En los párrafos siguientes se exponen los mecanismos y las salvaguardias jurídicas que protegen los derechos humanos en el Reino Unido.

B. Recursos y sistemas de indemnización y rehabilitación

La asistencia letrada

119. Toda persona que necesite asesoramiento jurídico o representación legal ante un tribunal tiene derecho, si reúne las condiciones establecidas para ello, a recibir ayuda con cargo a los fondos públicos, ya sea gratuitamente, ya aportando ella misma una contribución en función de sus recursos. A nivel gubernamental, la responsabilidad general de la asistencia letrada incumbe al Ministro de Justicia y, en Escocia, al Secretario de Estado para Escocia. Los sistemas de asistencia letrada en lo civil son administrados por la Junta de Asistencia Letrada, el Colegio de Abogados de Irlanda del Norte y la Junta de Asistencia Letrada de Escocia.

120. Las personas cuyos ingresos y ahorros no rebasen ciertos límites tienen derecho a que se le designe de oficio un procurador que les ayude en cualquier cuestión jurídica relacionada con sus circunstancias particulares. Forma parte de dicha ayuda asesorar al interesado sobre las leyes aplicables, escribir cartas en que su nombre y pedir la opinión de un abogado o letrado. Esa ayuda puede abarcar la representación del interesado en las causas civiles seguidas ante los tribunales correccionales, los tribunales de condado y en las audiencias ante el Tribunal de examen de casos psiquiátricos. Las disposiciones pertinentes prevén que la ayuda abarcará la labor inicial hasta un determinado límite de costo.

121. Las personas que, por su situación económica, sean declaradas con derecho a asistencia de oficio y en cuyos casos se justifique pueden obtener ayuda letrada, que comprende la representación ante el tribunal, para la mayoría de los procesos civiles. Los solicitantes de este beneficio deben demostrar, no sólo que tienen motivos razonables para entablar un proceso o defenderse en él, sino que también es razonable que, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, reciban o sigan recibiendo asistencia letrada. Si se otorga esa asistencia, la causa sigue su curso ordinario, con la salvedad de que el cliente no abona directamente suma alguna al letrado sino que todos los pagos se hacen a través del Fondo para la asistencia letrada. Puede prestarse gratuitamente o en proporción a la contribución del cliente.

122. En circunstancias limitadas, la parte no asistida puede, en caso de sentencia a su favor, hacerse reintegrar por el Fondo para la asistencia letrada las costas procesales en que haya incurrido. Si la persona asistida recupera o conserva, gracias al proceso, sumas de dinero o bienes, el Fondo de asistencia letrada puede percibir una primera comisión sobre dichas sumas o bienes para resarcirse de las sumas que él haya desembolsado en el caso.

123. En los procesos penales en Inglaterra y Gales, el tribunal competente puede ordenar que se otorgue asistencia letrada cuando ello redunde en interés de la justicia y el demandado tenga derecho a ayuda financiera. Por otra parte, debe decretarlo (en función de los recursos) cuando la persona de que se trate esté acusada de homicidio o cuando el fiscal recurra o solicite autorización para recurrir del Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal) a la Cámara de los Lores.

124. En Inglaterra y Gales, en virtud de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal, de 1984, la Junta de Asistencia Letrada toma las disposiciones necesarias para que ante los juzgados correccionales haya abogados de oficio que asesoren y representen en la fase inicial a los demandados que precisen esa ayuda y para que haya asimismo, durante las 24 horas del día, abogados de oficio que proporcionen asesoramiento y asistencia a los sospechosos en las comisarías. Los servicios de los abogados de oficio son gratuitos.

125. Las disposiciones relativas a la asistencia letrada en los procesos penales de Irlanda del Norte son en general similares a las de Inglaterra y Gales. En Escocia la ley prevé un sistema de abogados de oficio para los detenidos que comparecen ante los tribunales de condado o de distrito.

El criterio del "interés de la justicia" se aplica en todos los procesos sumarios penales. La decisión acerca de la ayuda solicitada incumbe a la Junta Escocesa de Asistencia Letrada y en circunstancias extremas al tribunal. El criterio de la "falta de medios" sólo se aplica en circunstancias extremas. La asistencia letrada para las causas penales en Escocia e Irlanda del Norte es gratuita.

126. En cierto número de zonas urbanas hay centros jurídicos que proporcionan gratuitamente asesoramiento y representación letrada. Estos centros, entre cuyas fuentes de financiación, bastante diversas, figuran con frecuencia las autoridades locales, emplean generalmente a abogados remunerados de modo permanente, y muchos tienen asimismo trabajadores de la comunidad. Gran parte de su tiempo está dedicada a los problemas de la vivienda, el empleo, la seguridad social y la inmigración. También puede obtenerse asesoramiento gratuito en las Oficinas de Asesoramiento del Ciudadano, los centros de asesoramiento de los consumidores y de asesoramiento sobre la vivienda, y en los centros de asesoramiento especializados mantenidos por diversas organizaciones benéficas. El Centro de asesoramiento letrado a los refugiados (Refugee Legal Centre) y el Servicio de asistencia a los inmigrantes (Immigration Advisory Service) suministran asesoramiento y ayuda a los solicitantes de asilo y el Servicio de asistencia a los inmigrantes también presta asesoramiento y asistencia a las personas que tienen derecho a apelar en cuestiones de inmigración.

Indemnización por una condena/detención injusta

127. En octubre de 1988 el Reino Unido promulgó leyes destinadas a incorporar al ordenamiento jurídico las disposiciones del párrafo 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En virtud del artículo 133 de la Ley de Procedimiento Penal de 1988, toda persona cuya condena por un delito penal haya sido revocada por el Tribunal de Apelación tendrá derecho: 1) previa solicitud presentada al margen de los plazos regulares establecidos, o 2) previo ejercicio por el Secretario de Estado de sus poderes de intervención para remitir la condena al Tribunal de Apelación, o 3) sobre la base de indulto concedido en virtud de la prerrogativa real de clemencia, a solicitar del Secretario de Estado una indemnización. Si la persona interesada falleciese, su representante personal podrá presentar al Secretario de Estado la solicitud correspondiente.

128. En virtud de lo dispuesto en la Ley de 1988 corresponde al Secretario de Estado decidir en definitiva si procede o no pagar la indemnización, y determinar si la decisión del Tribunal de Apelación de revocar la condena o conceder el indulto se ha debido a que se ha producido o descubierto un hecho que prueba más allá de toda duda razonable un error judicial. Este criterio es menos restrictivo que el del párrafo 6 del artículo 14 del Pacto Internacional, que requiere que se haya producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial. Para decidir si procede o no la indemnización, el Secretario de Estado tendrá también en cuenta si el no haberse revelado el hecho desconocido es en todo o en parte imputable a la persona que solicita la indemnización.

129. La Ley de apelación penal de 1995 prevé el establecimiento de la Comisión de revisión de casos penales, en cuanto organismo independiente del ejecutivo y mecanismo que permita a los tribunales examinar presuntos errores judiciales. La Comisión entrará en funcionamiento a principios de 1997 y en esa fecha se suprimirán las facultades de remisión de las causas de que dispone el Secretario del Interior. La Comisión, investigará y examinará los casos de sentencias condenatorias en las que presuntamente se hayan cometido errores judiciales y remitirá las causas correspondientes al Tribunal de Apelación.

130. El artículo 133 de la Ley de procedimiento penal de 1988 no prevé la indemnización en el caso de la persona que haya estado detenida bajo la inculpación de un delito que posteriormente se ha demostrado infundada, o de la que ha sido absuelta por un tribunal o en virtud de apelación formulada en el plazo fijado por la ley. En tales circunstancias y cuando la persona haya sido detenida, el Secretario de Estado puede, a petición del interesado, autorizar el pago de una indemnización ex gratia.

131. Sólo se considerará la posibilidad de conceder una indemnización ex gratia si la detención se ha debido a un error grave de un miembro de la policía o de otro órgano público, o en otras circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, si en el juicio se dan a conocer hechos que exoneren plenamente al acusado. En cambio, no se tomarán en cuenta las solicitudes de indemnización basadas en el simple hecho de que, en el curso del juicio o durante la apelación, el ministerio público no haya podido demostrar más allá de toda duda razonable la realidad de la acusación formulada.

132. Si el Secretario de Estado considera que la indemnización se justifica con arreglo al artículo 133 de la Ley de procedimiento penal de 1988, su cuantía será determinada por un asesor independiente. El Secretario de Estado se ha comprometido a abonar toda indemnización ex gratia, que recomiende el asesor. Cuando se haya obtenido una sentencia favorable, la indemnización comprenderá el pago de las costas procesales razonables en que haya incurrido el solicitante.

133. La aceptación por el solicitante de la indemnización autorizada por el Secretario de Estado no le obliga a firmar compromiso alguno que limite su derecho a ejercer cualquier otra acción que considere oportuna.

134. Las personas retenidas por otras razones no basadas en una autorización legal, por ejemplo por error en el cálculo de la sentencia de un tribunal o por no haberse ejecutado sin dilación la orden judicial de puesta en libertad de una persona bajo fianza, también pueden solicitar del Secretario de Estado una indemnización ex gratia. Pueden asimismo presentar una demanda de daños y perjuicios.

La situación de las víctimas de la delincuencia

135. Los tribunales pueden ordenar a toda persona que haya sido condenada por un delito que abone a la víctima de éste una indemnización por las lesiones, pérdidas o daños que haya sufrido de resultas del mismo.

En Inglaterra y Gales los tribunales tienen la obligación de considerar esta cuestión en todos los casos procedentes y de motivar toda decisión denegatoria. La indemnización a las víctimas debe tener prioridad sobre la multa en el caso de que el tribunal esté considerando la posibilidad de imponer ambas cosas, y, entre el cobro de la suma adjudicada como indemnización y el cobro de la multa, es al primero al que debe darse la preferencia.

136. Si el Servicio Procesal de la Corona decide no incoar el proceso, las víctimas pueden ejercitar una acción privada, pero en la práctica rara vez lo hacen. También pueden tratar de obtener daños y perjuicios ante los tribunales civiles. En todo caso, se ha simplificado el procedimiento ante éstos a fin de que, en casos de menor cuantía, las personas que carecen de conocimientos jurídicos puedan obtener satisfacción.

137. Todas las víctimas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sufran lesiones graves de causas de un delito violento en Gran Bretaña pueden solicitar indemnización con cargo a los fondos públicos con arreglo al plan de indemnización por lesiones derivadas de delito. La indemnización se basa en una escala de cantidades, y los pagos pueden oscilar entre 1.000 libras y 500.000 libras para las víctimas que hayan sufrido lesiones más graves.

138. En Irlanda del Norte existen disposiciones separadas, ya que en algunas circunstancias la indemnización puede pagarse con cargo a fondos públicos si se trata de lesiones de origen delictivo o de daños causados intencionadamente a bienes, incluido el lucro cesante.

139. También se está tratando de atender a las necesidades de las víctimas de delitos en sus aspectos prácticos. Hay, en efecto, más de 360 planes de ayuda de los que puede beneficiarse la totalidad de la población de Inglaterra y Gales, y más de 12.000 voluntarios capacitados, que hacen visitas, llaman por teléfono o escriben a las víctimas para ofrecerles información, asesoramiento y apoyo de tipo emocional y práctico. También hay planes de apoyo a los testigos en los 78 distritos judiciales de la Corona en Inglaterra y Gales. Todos estos planes reciben una subvención pública de casi 12 millones de libras que se encauza por medio de la beneficencia nacional, denominada Apoyo a las Víctimas. Análogos, en términos generales son los planes que se aplican en Escocia e Irlanda del Norte.

140. En febrero de 1990 el Gobierno publicó la llamada Carta de la Víctima, en la cual se enuncian las normas de la ayuda que las víctimas de la delincuencia deben esperar de la administración encargada de la justicia penal y cómo reclamar si no obtienen esa ayuda. A todas las víctimas que denuncien un delito se les entrega un ejemplar de la "Carta de la Víctima" con asesoramiento práctico sobre lo que ha de hacerse después de un delito. En ella se explica con sencillez los procedimientos policiales y judiciales, cómo solicitar indemnización y qué otras ayudas existen.

C. Protección constitucional de los derechos humanos

141. El Reino Unido no tiene declaración de derechos ni constitución escrita. Su sistema de gobierno parlamentario es el resultado de una evolución gradual que ha durado varios siglos. Con arreglo a las disposiciones constitucionales vigentes, el disfrute de los derechos y las libertades fundamentales es inherente a todo miembro de nuestra sociedad. Por consiguiente, los derechos no son conferidos por el Gobierno, sino que ya existen a menos que el Parlamento decida que las necesidades de la sociedad obligan a restringirlos de alguna manera.

D. Incorporación de los instrumentos de derechos humanos en la legislación nacional

142. En el Reino Unido, los tratados y convenios no se incorporan directamente al derecho interno, como en otros países. Por eso, cuando sea preciso modificar las leyes para dar cumplimiento a un instrumento internacional, el Gobierno presenta un proyecto de ley basado en los artículos pertinentes del tratado o convenio de que se trate. Dicho proyecto de ley se tramita por los procedimientos parlamentarios normales.

E. Aplicación por los tribunales de los instrumentos de derechos humanos

143. Los tribunales del Reino Unido interpretan sólo las leyes promulgadas por el Parlamento y las partes de la legislación de la Comunidad Europea que sean directamente aplicables en los Estados miembros.

F. Órganos nacionales encargados de vigilar la aplicación de los derechos humanos

144. En el Reino Unido los derechos humanos están salvaguardados por la labor de varios órganos especializados establecidos por ley. Los principales son:

- a) las Comisiones de Igualdad de Oportunidades, establecidas en virtud de la Ley sobre discriminación por motivos de sexo de 1975 y el Decreto sobre discriminación por motivos de sexo (Irlanda del Norte) de 1976;
- b) la Comisión de Igualdad Racial, establecida en virtud de la Ley de relaciones raciales de 1976;
- c) la Oficina del Defensor del Pueblo (Parliamentary Commissioner for Administration), denominado a menudo "el ombudsman", establecida en virtud de la Ley sobre el Defensor del Pueblo de 1967;
- d) la Oficina del Registrador encargado de la protección de datos, establecida en virtud de la Ley sobre la protección de los datos de carácter personal de 1984;

- e) el Organismo de quejas contra la policía, establecido en virtud de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984, y la Comisión independiente para quejas contra la policía de Irlanda del Norte, establecida en virtud del Decreto sobre la policía (Irlanda del Norte) de 1987.

145. Además, se han establecido en Irlanda del Norte los órganos siguientes, en reconocimiento de sus circunstancias especiales:

- a) el Asesor independiente en materia de procedimientos de quejas contra las fuerzas armadas, establecido en virtud de la Ley sobre Irlanda del Norte (disposiciones de emergencia) de 1991;
- b) la Comisión Consultiva Permanente sobre Derechos Humanos, establecida en virtud de la Ley sobre la Constitución de Irlanda del Norte de 1973.

Igualdad de oportunidades

146. En virtud de la Ley sobre discriminación por motivos de sexo de 1975, que se aplica en Inglaterra, Gales y Escocia, es ilegal tratar a una persona de modo menos favorable que a otra por motivos de sexo, en lo que se refiere al empleo (incluida la formación), educación y provisión al público de vivienda y otros bienes, instalaciones y servicios. La Ley también ofrece protección contra la discriminación por estar casado así como un trato especial a las mujeres en relación con el embarazo y el parto. También se declaran ilegales los anuncios que reflejen una intención discriminatoria ilícita. En cumplimiento de la directriz de igualdad de trato de la Comunidad Europea, la citada ley fue enmendada en 1986 para suprimir las exenciones de que gozaban las empresas que empleaban a cinco personas o menos, de conceder a la mujer el derecho legal a seguir trabajando hasta la misma edad que el hombre en aquellas ocupaciones en las que hasta entonces se preveía una edad de jubilación diferente, y de suprimir las restricciones que, en el caso de las mujeres, se aplicaban al trabajo por turnos y al trabajo nocturno. La Ley sobre igualdad de remuneración de 1970 (en su forma enmendada) concede a la mujer el derecho a un salario igual que el del hombre por la realización de un trabajo igual o que haya sido considerado equivalente con arreglo a un esquema de evaluación de puestos y, desde 1984, de un trabajo de igual valor. Ambas leyes se aplican por igual a la discriminación en contra de cualquier sexo. Se han promulgado leyes similares en Irlanda del Norte. En las disposiciones reglamentarias sobre la igualdad de pago y la discriminación por motivos de sexo (diversas enmiendas) de 1996 se conceden ulteriores facultades a los tribunales industriales: por ejemplo, pueden otorgar una compensación en casos de discriminación indirecta por motivos de sexo.

147. Las personas que consideren que han sido objeto de discriminación tienen derecho a reclamar ante un tribunal laboral, en caso de discriminación en el empleo, o ante un tribunal civil en los demás casos. Por ese procedimiento cabe obtener reparación en forma de compensación o de indemnización por daños y perjuicios, declaración de derechos u orden de

ejecutar, o de abstener de ejecutar, determinados actos. Contra las decisiones de los tribunales existe en estos casos el derecho de apelación.

148. La Comisión de Igualdad de Oportunidades, establecida en virtud de la Ley de 1975, contribuye a la observancia de estas leyes en Inglaterra, Gales y Escocia, ofrece asesoramiento y asistencia a las personas que se consideran objeto de discriminación, promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y sigue de cerca la aplicación de las disposiciones pertinentes. La Comisión tiene además un código práctico para la eliminación de la discriminación en el empleo.

149. En Irlanda del Norte, el Decreto sobre discriminación por motivos de sexo de 1976 declara ilegal la discriminación por motivos de sexo o matrimonio, tanto en el empleo como en la provisión de bienes, instalaciones y servicios.

150. En virtud de la legislación de la Comunidad Europea, los Estados miembros están obligados a suprimir toda discriminación existente en los planes legales de seguridad social que ofrecen protección contra las enfermedades, el desempleo, la invalidez, la vejez, los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Existen, sin embargo, excepciones como la determinación de la edad de jubilación. El Reino Unido ha tomado medidas para aplicar en su sistema de seguridad social la legislación comunitaria.

Relaciones raciales

151. La promoción de la igualdad de oportunidades en una sociedad multirracial en la que todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones es el objeto central de la política del Gobierno en materia de relaciones raciales. La política que han venido aplicando sucesivos gobiernos británicos es la de velar por que los miembros de las minorías étnicas que viven en Gran Bretaña tengan, sean cuales fueren sus orígenes étnicos, las mismas oportunidades de contribuir a la sociedad y beneficiarse de ella.

152. En virtud de la Ley de relaciones raciales de 1976, que reforzó y sustituyó la legislación anterior en Inglaterra, Escocia y Gales, es ilegal hacer a cualquier persona objeto de trato menos favorable que a otra, por motivos de color, raza, nacionalidad (con inclusión de la ciudadanía) u origen étnico o nacional y tanto por lo que respecta al empleo (incluida la formación) como a la educación y la provisión al público de viviendas, bienes, instalaciones, servicios y locales. Salvo pocas excepciones, también son ilegales los anuncios que reflejan una intención discriminatoria. El procedimiento relativo a la tramitación de las quejas por discriminación racial es el mismo que el que se aplica a las quejas por discriminación sexual; las personas discriminadas tienen derecho a reclamar directamente ante los tribunales civiles y los tribunales laborales.

153. La función de la Comisión de Igualdad Racial, establecida en virtud de la Ley de 1976, consiste en eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y las buenas relaciones raciales, y seguir constantemente de

cerca la aplicación de la ley. La Comisión proporciona información y asesoramiento al público sobre la ley y puede, en virtud de sus facultades discrecionales, ayudar a las personas que se consideren víctimas de discriminación ilegal. Ha elaborado además un código práctico para la eliminación de la discriminación racial y la promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo, código que ofrece orientación práctica a los empleadores, los sindicatos y demás interesados acerca de las disposiciones de la ley; dicho Código fue aprobado por el Parlamento y entró en vigor en abril de 1984. La Comisión otorga, por otra parte, subvenciones para proyectos locales que están siendo llevados a cabo por más de 88 consejos de relaciones intercomunales y por otros órganos. La Ley de relaciones raciales no se aplica a Irlanda del Norte, donde rigen, en materia de discriminación, leyes diferentes que se ajustan a las circunstancias locales.

154. En julio de 1996 se publicó un proyecto de propuesta para un Decreto sobre relaciones raciales (Irlanda del Norte), que deberá entrar en vigor en abril de 1997. Sus disposiciones serán en general similares a las de la Ley de relaciones raciales de 1976, con algunas enmiendas para adaptarla a Irlanda del Norte. En virtud del decreto se establecerá también una Comisión de Igualdad Racial para Irlanda del Norte.

155. La Ley sobre incitación al odio racial ha sido reforzada por la Ley de orden público de 1986, que entró en vigor en abril de 1987. Se considera culpable de delito a toda persona cuyas palabras o comportamiento sean amenazadores, ofensivos o injuriosos o que exhiba, publique o distribuya material de esa índole, no sólo cuando sea probable que incite al odio racial sino también cuando tal haya sido la intención del autor de tales actos. La nueva ley se amplía además al ámbito de la anterior para abarcar la radiodifusión y la televisión (con excepción de la Sociedad Británica de Radiodifusión (BBC) y de la Comisión de Televisión Independiente), la televisión por cable y otros medios de información que supongan la transmisión de imágenes visuales o de sonido. También es delito poseer material racialmente subversivo, y el Gobierno, en virtud de la Ley de justicia penal de 1994, ha adoptado medidas para potenciar las facultades de la policía en materia de allanamiento, registro e incautación respecto de la publicación y distribución de dicho material.

El Defensor del Pueblo (Parliamentary Commissioner for Administration)

156. En virtud de la Ley del Defensor del Pueblo de 1967 se estableció la oficina del Defensor del Pueblo -conocido con frecuencia como el ombudsman- para investigar quejas de particulares que afirmen que han sido víctimas de una injusticia como resultado de la incompetencia de la administración.

157. El Defensor del Pueblo puede investigar cualesquier medidas adoptadas "en el ejercicio de funciones administrativas" por dependencias del Gobierno central o en nombre de ellas. Entran en su jurisdicción muchos órganos, como la Comisión de Igualdad de Oportunidades, la Comisión de Relaciones Raciales, la Junta de Asistencia Letrada y los órganos encargados de la reglamentación de la industria privada. Los miembros del Parlamento remiten

quejas al Defensor del Pueblo, el cual es independiente del Gobierno y presenta informes a un comité de la Cámara de los Comunes. Esos informes se hacen públicos.

158. Se han establecido también varios otros ombudsman para los gobiernos locales, para el Servicio Nacional de Salud y el ombudsman de asistencia jurídica.

Protección de los datos de carácter personal

159. La creciente capacidad de las computadoras para reunir y redistribuir información sobre las personas es asunto que viene preocupando desde comienzos del decenio de 1970. La Ley sobre la protección de los datos de carácter personal de 1984, vigente en todo el Reino Unido, introdujo salvaguardias en cuanto al tratamiento computadorizado de los datos personales, y permitió que el Reino Unido ratificase el Convenio europeo para la protección de las personas con relación al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, de 1981.

160. Los principios sobre la protección de los datos establecidos por la Ley de 1984 exigen, por ejemplo, que los datos personales sean tratados leal y legalmente, que sólo se utilicen para fines determinados y que estén debidamente protegidos. Las personas que desean elaborar esos datos deben (salvo algunas excepciones) inscribirse en el Registro para la Protección de los Datos Personales, cuyo titular está facultado para hacer aplicar los principios de la ley.

161. Aunque la ley (y la Convención en que se basa) se refieren a la protección de los datos personales, también están destinadas a facilitar su transmisión; para ello se han establecido salvaguardias que han permitido establecer el debido equilibrio entre el derecho a conocer y la vida privada de una persona.

162. Se está trabajando actualmente para incorporar a la legislación del Reino Unido, antes del 24 de octubre de 1998, las disposiciones de la directiva de la Comunidad Europea sobre la protección de los datos de carácter personal.

Quejas contra la policía

Inglaterra y Gales

163. La tramitación de las quejas contra la policía en Inglaterra y Gales está regulada por la Parte IX de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984, en cuya virtud se estableció el Organismo de Quejas contra la Policía y su Reglamento. El Organismo sólo puede supervisar la investigación de los hechos ocurridos a partir del 29 de abril de 1984, pero el resto de sus facultades (por ejemplo, con respecto a la disciplina) no está sometido a esa limitación. Las funciones del Organismo de Quejas son las que a continuación se describen.

164. El artículo 84 de la Ley define como "queja" a efectos de la propia ley toda queja que, acerca de la conducta de un funcionario de la policía, sea formulada por un particular, o en nombre y con el consentimiento escrito de un particular. El mismo artículo estipula que cualquier aspecto de una queja que se refiera a la dirección y el control de una unidad de la policía por el jefe de la misma o por una persona que desempeñe las funciones de éste queda fuera del ámbito de las disposiciones relativas a la tramitación de las quejas que figuran en la Parte IX de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal.

165. Conforme al artículo 86 de la ley, cuando se presenta una queja contra un funcionario superior, la autoridad policial competente debe registrarla e investigarla, con la salvedad de que, si dicha autoridad llega a la conclusión de que la conducta denunciada, aun si llegara a probarse, no justificaría un encausamiento penal o disciplinario, puede tratar la queja con arreglo a su buen criterio.

166. En virtud del artículo 85 de la ley, si un jefe de la policía recibe una queja contra un funcionario de su unidad de la categoría de comisario jefe o inferior, debe registrarla y disponer que se resuelva de manera oficiosa o, si no le fuere aplicable ese procedimiento, que sea objeto de investigación oficial.

167. En ciertas circunstancias cabe prescindir del requisito de investigación oficial de las quejas o de solución oficiosa. El Reglamento general sobre quejas contra la policía de 1985 prevé esa posibilidad en caso de retiro de la queja. Las disposiciones de 1985 relativas a la exención del requisito de investigación de las quejas, que fueron enmendadas por las disposiciones de 1990 relativas a la misma cuestión, prevé dicha exención en las siguientes circunstancias:

- a) si la queja es anónima o reiterativa;
- b) si la queja es vejatoria, u opresiva, o si por cualquier otro motivo, constituye un abuso del procedimiento aplicable a las quejas; o si es imposible investigarla conforme a lo definido en el anexo del Reglamento;
- c) si han transcurrido más de 12 meses entre el incidente, o el último incidente, a que se refiere la queja, y la formulación de ésta, y no hay ninguna razón que justifique la demora, o es probable que la demora lleve a una solución injusta.

168. El artículo 85 de la Ley de 1984 dispone que la primera medida que debe adoptar el jefe de policía que haya registrado una queja es considerar si ésta puede ser resuelta de manera oficiosa, y en tal caso designar a un funcionario que tenga como mínimo la categoría de inspector jefe para que se encargue del procedimiento. Las quejas sólo pueden resolverse de modo oficioso cuando la conducta a que se refieran no justificaría, aun en el caso de poder probarse, un encausamiento penal o disciplinario y siempre que el denunciante esté de acuerdo con ese procedimiento.

169. El procedimiento oficioso constituye una manera flexible y sencilla de tratar las quejas de menor entidad evitando todo el largo proceso de la investigación oficial. Tal procedimiento es apropiado cuando desde el principio resulta claro que la presunta conducta delictuosa o infracción del código disciplinario no daría probablemente lugar, aun de probarse su veracidad, a la formulación oficial de cargos penales o disciplinarios, sino a una simple amonestación o una advertencia; o cuando la investigación preliminar demuestre que la conducta ha sido legal y razonable.

170. El procedimiento oficioso se rige por un reglamento de 1985, el cual exige que el funcionario designado para tratar de resolver la queja por el procedimiento oficioso recabe la opinión tanto del denunciante como del funcionario que ha sido denunciado. Su tarea consiste en llegar a un arreglo que permita considerar al denunciante que su queja ha sido tratada de la manera apropiada. Esto no implica necesariamente la presentación de excusas en nombre de la policía o del agente denunciado. En algunos casos basta con explicar al denunciante la ley o los procedimientos a que se atuvo el funcionario cuando se produjo el incidente que dio lugar a la queja. Otras veces, sin embargo, puede haber una diferencia irreconciliable entre la descripción del incidente hecha por el denunciante y la versión del funcionario, en cuyo caso también suele ser suficiente explicar la situación al denunciante e invitarle a admitir que no se puede hacer más. La única limitación que impone el reglamento a la libertad del funcionario designado para tratar de resolver la queja del modo más apropiado es su obligación de no presentar excusas en nombre del funcionario implicado a menos que éste haya reconocido la conducta que se le reprocha.

171. Cuando el jefe de policía, después de haber intentado en vano resolver la queja por el procedimiento oficioso, ve que éste no da resultado, o que la queja no puede, por cualquier otra razón, resolverse por esa vía, dispondrá que se proceda a una investigación oficial. En esos casos sucede lo siguiente:

- a) Transmisión obligatoria de la queja al organismo de quejas contra la policía. Si el jefe de policía decide que una queja debe ser oficialmente investigada, primero considerará si es necesario o conveniente que de la queja se dé traslado al Organismo de quejas contra la policía para que éste supervise la investigación. El inciso 1) a) i) del artículo 87 de la Ley de 1984 estipula que el jefe de policía debe transmitir al Organismo toda denuncia en la que se afirme que la conducta denunciada ha ocasionado muerte o lesiones graves a otra persona. El reglamento sobre la transmisión obligatoria, etc. de quejas contra la policía de 1985 exige que se transmitan al Organismo todas las quejas en las que se denuncien actos que, de haber tenido lugar, habrían constituido una agresión con daños corporales reales; o un delito en virtud del artículo 1 de la Ley de prevención de la corrupción de 1906; o un delito grave sancionado con la detención en el sentido de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de 1984. La denuncia debe ser notificada al Organismo dentro de un plazo determinado.

- b) Transmisión facultativa al Organismo de quejas contra la policía.
El apartado b) del párrafo 1 del artículo 87 de la Ley de 1984 estipula que el jefe de policía puede poner en conocimiento del organismo cualquier denuncia que no tenga obligación de transmitir. El párrafo 2 del artículo 87 faculta al Organismo para solicitar que se le transmita cualquier denuncia que no le haya sido transmitida por el jefe de policía. En virtud del artículo 88, cualquier cuestión que no haya sido objeto de queja y que constituya un indicio de que un policía pudiere haber cometido un delito penal o disciplinario puede ser puesta en conocimiento del Organismo, si así lo considera conveniente el jefe de policía en razón de su gravedad o por circunstancias excepcionales.
- c) La función del Organismo de quejas contra la policía. El Organismo de quejas contra la policía debe supervisar la investigación de toda queja que se le transmita en virtud del inciso 1) a) i) del artículo 87 de la Ley de 1984, y de cualquier otra queja (o cuestión que no haya sido objeto de queja y que haya sido puesta en su conocimiento en virtud del artículo 88) siempre que considere conveniente hacerlo en pro del interés público. Si el Organismo supervisa una investigación, puede optar por ejercer el derecho que le reconoce el artículo 89 de la ley de aprobar el nombramiento del funcionario instructor.
- d) El funcionario instructor. El artículo 85 de la Ley de 1984 dispone que el funcionario nombrado para efectuar una investigación oficial debe tener al menos la categoría de inspector jefe y, como mínimo, la del funcionario contra el cual se haya presentado la queja. Además, con arreglo al reglamento disciplinario de la policía de 1985, debe prestar servicio en una subdivisión o sección distinta de la del funcionario acusado. En los casos en que así convenga, el jefe de la policía invitará a efectuar la investigación a un funcionario de otra unidad.

172. Una vez que haya finalizado su investigación, o la haya practicado hasta donde razonablemente quepa hacerlo, el funcionario instructor transmitirá un informe al jefe de policía. Si la investigación ha sido supervisada por el Organismo de quejas contra la policía, presentará, en cambio, ese informe al propio Organismo y enviará copia de él al jefe de policía. Una vez finalizada una investigación que haya supervisado, el Organismo deberá hacer pública una declaración (que se enviará al jefe de policía, al denunciante y al funcionario denunciado), en la que se indique si la investigación se ha realizado, a su juicio, correctamente, y se especifiquen los aspectos en que considere que no se ha hecho así. Si estima que la investigación se ha realizado correctamente, puede también hacer constar las razones que tiene para ello.

173. En virtud del párrafo 4 del artículo 90 de la Ley de 1984, si un jefe de la policía determina que un informe de investigación a él transmitido indica que uno de sus subordinados puede haber cometido un delito penal,

y si considera que el supuesto delito es tal que el funcionario debería ser inculcado, deberá enviarse copia del informe al Fiscal General. Éste comunicará personal y directamente al denunciante su decisión de si el funcionario de la policía denunciado debe ser inculcado o no. El Fiscal General no explica las razones de su decisión, pero si se ha pronunciado en contra de la inculcación, en las respuestas enviadas al denunciante y al jefe de policía indicará normalmente si considera que las pruebas no justifican un proceso penal o si la incoación de tal proceso no va a redundar necesariamente en pro del interés público.

174. Una vez considerados todos los aspectos penales, el jefe de policía debe transmitir el caso al Organismo de quejas contra la policía (juntamente con un ejemplar del informe de la investigación, en caso de que el organismo no la hubiere supervisado), exponiendo el parecer del jefe de policía sobre la queja e informando sobre cualquier cargo disciplinario que haya formulado o que se proponga formular o incluso, en el caso de que no se formulen cargos disciplinarios, los motivos para no hacerlo. El jefe de policía no está obligado a someter el caso al examen del Organismo si ya ha formulado cargos disciplinarios y si el funcionario denunciado ha admitido los cargos y no se ha retractado después.

175. Si el Organismo de quejas contra la policía considera que habría que formular un cargo disciplinario contra un funcionario o por una denuncia que no haya dado ya lugar a cargos disciplinarios, recomendará al jefe de policía el cargo que le parezca que haya que formular y fundamentará su recomendación. El jefe de policía comunicará al Organismo si acepta su recomendación y, en caso afirmativo, la pondrá en ejecución. En caso de que el jefe de policía disienta de la recomendación del Organismo de formular un cargo disciplinario, podrán debatir la cuestión, pero, en último término, si no llegan a un acuerdo mutuo, el Organismo está facultado para dar instrucciones al jefe de policía para que formule los cargos disciplinarios especificados.

176. El artículo 104 de la Ley de 1984 trata de la cuestión del riesgo de doble condena o absolución y estipula que si un miembro de una unidad de la policía ha sido condenado o absuelto con relación a un delito penal, no podrá ser acusado de ninguna falta contra la disciplina que en sustancia constituya el mismo hecho que el delito con relación al cual haya sido condenado o absuelto.

Escocia

177. En Escocia no existe ningún organismo de quejas contra la policía. Todo jefe de policía está obligado legalmente a velar por que se investiguen las quejas contra sus agentes, pero las quejas relativas a un comportamiento presuntamente criminal son remitidas al fiscal, el cual es totalmente independiente del servicio de policía.

178. En 1993 el Inspector Jefe del Real Cuerpo de Policía examinó el procedimiento de tramitación de quejas y llegó a la conclusión de que el sistema funcionaba bien. Sin embargo, diversos Ministros decidieron que el

sistema fuera objeto de un examen más independiente y que debía atribuirse una función más importante al Inspector Jefe en el estudio de las quejas. Se dispuso lo necesario para ello en la Ley sobre los juzgados de guardia y los tribunales de magistrados (Police and Magistrates: Courts Act) de 1994, que faculta al Inspector Jefe para pedir a un jefe de policía que vuelva a examinar una queja. En la actualidad, se comunica el resultado al denunciante, junto con cualesquier observaciones del Inspector Jefe. Esas disposiciones entraron en vigor el 1º de agosto de 1996.

179. Las quejas son investigadas por un funcionario superior que no haya tenido nada que ver con el caso anteriormente. En ocasiones, el funcionario investigador procede de otro cuerpo de policía, pero ello sólo sucede normalmente cuando se formulan quejas contra jefes de policía o denuncias muy graves.

Irlanda del Norte

180. En Irlanda del Norte la Comisión Independiente para las Quejas contra la Policía de Irlanda del Norte examina las quejas y, con sujeción a cualquier decisión del Director General del Servicio de Acusación Pública, los respectivos informes de las investigaciones. La Comisión Independiente se encarga de garantizar que la investigación de las quejas se realice a fondo e imparcialmente, y está obligada a supervisar la investigación de toda queja que entrañe la muerte o lesiones graves, pudiendo supervisar la investigación de otras quejas. Los procedimientos son en general análogos a los aplicables en Inglaterra y Gales.

Salvaguardias adicionales para la protección de los derechos humanos en Irlanda del Norte

181. En reconocimiento de las necesidades especiales de esta parte del Reino Unido, y en virtud de la Ley sobre Irlanda del Norte (disposiciones de emergencia) de 1991, se creó el puesto de Asesor independiente sobre procedimientos de quejas contra las fuerzas armadas. La función principal del Asesor es examinar los procedimientos militares para la investigación de quejas sin carácter penal formuladas contra miembros de las fuerzas armadas en Irlanda del Norte. El Asesor presenta un informe anual al Secretario de Estado, que se publica y se remite al Parlamento.

182. La Comisión Permanente de Asesoramiento en materia de Derechos Humanos, creada en virtud de la Ley sobre Irlanda del Norte (Constitución) de 1973 es un órgano independiente que informa anualmente al Secretario de Estado para Irlanda del Norte acerca de una amplia gama de cuestiones relativas a los derechos humanos en Irlanda del Norte. El informe se publica y se remite al Parlamento.

IV. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

183. El Gobierno publica, por conducto del Real Servicio de Publicaciones, el texto de los instrumentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos que ha firmado el Reino Unido. Los textos publicados se presentan al Parlamento, y se entregan ejemplares de los mismos a las bibliotecas de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Por otra parte, en todas las buenas librerías pueden adquirirse ejemplares de estas publicaciones, que además pueden pedirse prestados a las bibliotecas más importantes.

184. Los informes del Reino Unido a los órganos establecidos con arreglo a los diversos instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas encargados de vigilar el cumplimiento por los Estados Partes de las obligaciones contraídas en virtud de dichos instrumentos son preparados por el Gobierno sobre la base de la información y de las aportaciones de los expertos de diversos departamentos gubernamentales y fuentes externas. Se remiten ejemplares al Parlamento y a los órganos interesados después de su publicación, y también tienen acceso a ellos los particulares.
